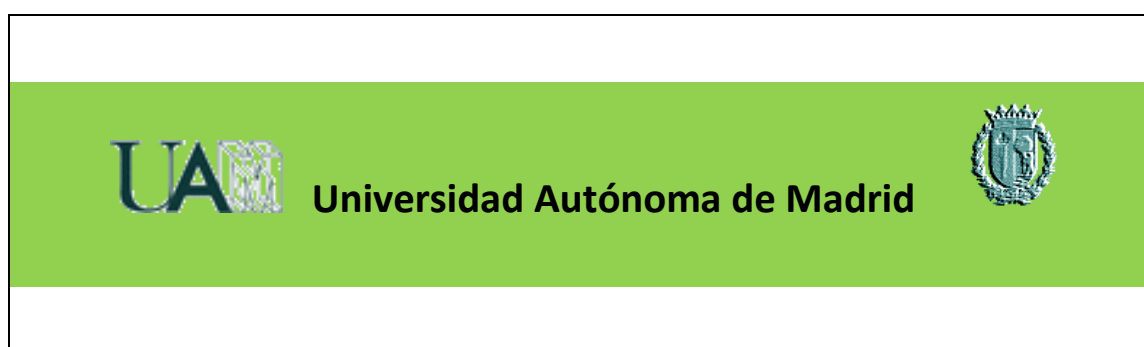


Poder, protesta social y cambio institucional

Antonio Antón

CUADERNO DE TRABAJO



CUADERNO DE TRABAJO

**Departamento de Sociología
Universidad Autónoma de Madrid**

TÍTULO: Poder, protesta social y cambio institucional

AUTOR: ANTÓN MORÓN, Antonio

Correo electrónico: antonio.anton@uam.es

<http://www.uam.es/antonio.anton>

Profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) - Departamento de Sociología. Licenciado en Sociología y Ciencias políticas por la UNED. Doctor en Sociología por la Universidad Complutense de Madrid (sobresaliente *cum laude*). Imparte docencia en la Facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y de Formación de Profesorado y Educación. Ha realizado diversas investigaciones, participa en dos Comités de Investigación de la Federación Española de Sociología y ha expuesto varias ponencias y comunicaciones en diferentes congresos de Sociología y Ciencias Políticas. Es especialista en Políticas públicas y Estado de bienestar, Movimientos sociales, acción colectiva y cambio social, Sociología del Trabajo y Sociología de la Educación. Colabora con distintos medios de comunicación y ha publicado numerosos artículos y más de una docena de libros. Entre los últimos están: *Reestructuración del Estado de bienestar* (2009), *La reforma del sistema de pensiones* (coord.) (2010), *Resistencias frente a la crisis. De la huelga general del 29-S al movimiento 15-M* (2011); *Educación Pública: de tod@s para tod@s. Las claves de la "marea verde"* (coautor) (2012), y *Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica* (2013).

Editado por Rebelión

Rebelión ha publicado este texto con el permiso del autor mediante una [licencia de Creative Commons](#), respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes. Se puede reproducir, total o parcialmente, citando esta fuente.

Madrid, septiembre de 2015

Índice

- 1. Origen y formación de la indignación**
- 2. Elementos novedosos del actual ciclo de protesta social e indignación**
- 3. Representación y pluralismo**
- 4. Clases dominantes, corrupción y su desprestigio social**
- 5. Conflicto social: movimiento cívico frente al poder**
- 6. Alternativa popular frente a la alternancia del bipartidismo**
- 7. Carácter y orientación del PSOE: su dilema estratégico**
- 8. Reequilibrios electorales: Oportunidad para el cambio político**
- 9. Alianzas: ¿Pacto de Estado PP-PSOE o Gobierno alternativo de progreso?**

Poder, protesta social y cambio institucional

¿Cómo puede la sociedad recuperar el control de las fuerzas de la economía, que durante la Revolución industrial fueron abandonadas en manos del mercado autorregulado, sin abandonar a la vez la libertad?
(Polanyi, 1944).

El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita.
(Stiglitz, 2012: 1).

El pacto keynesiano y el Estado de bienestar fue una respuesta al interrogante de Polanyi. La solución era que la sociedad debe recuperar el control de la economía mediante la acción política y la democracia. Significa su regulación pública en función del bienestar de la sociedad y para garantizar mayor igualdad y libertad para el conjunto. Inevitablemente, supone restringir la inmensa libertad de los mercados financieros, o sea, impedir la prioridad absoluta de la propiedad privada y asegurar los derechos de la ciudadanía frente a su dependencia respecto del beneficio privado de unos pocos. Ahora el poder económico-financiero con la colaboración de las capas gobernantes están consolidando la ruptura a su favor de ese equilibrio, y una minoría oligárquica controla los recursos, tal como dice Stiglitz. Y lo hacen en nombre de 'su' libertad para aumentar sus beneficios y su poder, en perjuicio de la libertad, la no-dominación y la igualdad del conjunto de la sociedad (Antón, 2009, y 2012).

Existen dos dinámicas contrapuestas, tal como señalamos lo largo de esta investigación: 1) la ofensiva liberal-conservadora del poder oligárquico, las élites dominantes (financieras y gubernamentales, europeas y mundiales), con sus responsabilidades en el desencadenamiento de la crisis socioeconómica y su posterior gestión regresiva; 2) el desarrollo de la indignación ciudadana y la protesta social progresista frente a la austeridad, los recortes sociales y por la democratización del sistema político, particularmente en España y otros países del sur europeo.

En el ámbito socioeconómico hemos expuesto el agravamiento de la desigualdad y las brechas sociales (Antón, 2014b, y 2014d): frente a una minoría privilegiada que se hace más rica hay una mayoría popular, las clases trabajadoras y el grueso de las clases medias, con descenso comparativo de su estatus, su capacidad adquisitiva y sus derechos sociales, laborales y de empleo. Su impacto, en cada segmento de esas capas populares, es heterogéneo. Se produce una gran fragmentación de los riesgos, capacidades y oportunidades, pero el conjunto de ellas tiene los rasgos comunes de una posición más incierta y subordinada. En el otro polo está la minoría rica, las capas altas, con su capacidad de control financiero, económico y de poder institucional, acompañada por sectores de clases medias, partícipes de la alta gestión económica e institucional, más acomodadas y con trayectorias ascendentes. Las clases medias, como capas intermedias según su posición en la ocupación, estatus social y nivel de rentas, superior a la media de la población, se han ido diferenciando. La mayoría, junto con las clases trabajadoras forman parte de las

capas populares. Las clases altas y medio-altas ascendentes, en gran medida, avalan las políticas impuestas, adquiriendo ventajas comparativas.

En el ámbito sociopolítico hemos explicado la conformación y la percepción social de una dinámica de injusticia, con dos polos principales (Antón, 2011; 2013a, y 2015). Por una parte, un poder oligárquico y minoritario, los poderosos o el *establishment*, que impone una gestión regresiva y autoritaria de la crisis. Por otra parte, una mayoritaria ciudadanía descontenta e indignada frente a esa involución social y democrática, crítica con las élites dominantes (financieras e institucionales) y reafirmada en los valores democráticos y de justicia social. A ello se añade la participación en la protesta social progresista de una amplia ciudadanía activa que goza de una mayoritaria simpatía popular. En medio, significativas capas intermedias en este plano sociopolítico y cultural que, con valores conservadores y tendencias de miedo y resignación o simplemente adaptativas individualmente, no cuestionan la continuidad del actual estatus quo.

Esta investigación expone sintéticamente las características de los principales actores y la articulación de este proceso de conflicto social y político. Tiene especial importancia ante la oportunidad abierta de un cambio político sustantivo, para definir las partes relevantes de esta dinámica y su interacción. Explicamos el contenido conceptual de clases dominantes y polarización sociopolítica y los elementos principales del cambio político e institucional en España. Es la suma de varios ensayos, unos inéditos y otros editados en distintos medios, reelaborados para este CUADERNO DE TRABAJO.

1. Origen y formación de la indignación

A título introductorio, avanzamos algunos rasgos de la conformación del proceso de indignación. Se inicia con las primeras y graves consecuencias sociales de la crisis económica (años 2008-2009): el paro masivo, la desigualdad social y la incertidumbre socioeconómica (Antón, 2014a; Piketty, 2014). Se produce un profundo y amplio descontento popular por esa problemática social y sus efectos, la mayoría de la sociedad los considera injustos y desiguales y señala ya a sus causantes y responsables directos: los mercados financieros y el poder económico. La palabra indignación se populariza más tarde, pero ya podemos hablar de una amplia indignación ciudadana, como enfado popular por una situación socioeconómica considerada injusta. La pugna cultural se establece por la legitimidad en la mayoría de la sociedad de una u otra interpretación, actitud y posición normativa: la valoración de la gravedad y la persistencia de esas consecuencias sociales (o su minusvaloración y transitoriedad con el discurso de la recuperación); la exigencia de responsabilidades a los poderosos (o su aval), y las garantías de los derechos sociales y democráticos (o sus recortes). Fracasan los intentos legitimadores del poder y sus aparatos mediáticos, y en la mayoría de la población se refuerza la indignación desde la cultura democrática y de justicia social.

En el año 2010 se incorpora una nueva característica: la indignación frente a los recortes sociales y laborales y la gestión regresiva de la clase política gobernante (y las instituciones europeas y la troika). Es decir, la indignación se amplía y se añaden

motivos políticos: la desconfianza popular en las élites políticas gestoras de la austeridad y la crítica al incumplimiento de los compromisos sociales y democráticos del Gobierno (socialista), junto con un distanciamiento –doloroso- con parte de su propia base social. Se conforma ya una corriente social indignada con ese doble sentido, se abre una brecha con los poderosos económicos e institucionales y comienza la protesta social masiva, en ese año, protagonizada inicialmente por el movimiento sindical. La pugna sociopolítica y cultural se establece en torno a la legitimidad social, bien de la política de austeridad y recortes sociales y sus gestores, o bien de la contestación social contra ellos. Frente a la justificación liberal conservadora de ‘hacer lo que hay que hacer’, o el matiz de la socialdemocracia gobernante de ‘no se puede hacer otra cosa’, se levanta el rechazo popular a una política injusta y una élite con rasgos autoritarios, que es necesario y posible cambiar. Se trataba de la pugna entre dos opciones: 1) favorecer la resignación social, la neutralización del descontento ciudadano y la relegitimación de las élites dominantes para consolidar una gestión regresiva y autoritaria de la crisis; 2) fortalecer la indignación, evitar la pasividad y el fatalismo en la ciudadanía e impulsar la protesta social a favor de la democracia, con mayor justicia social y un giro de la política económica y laboral. Entre amplios sectores populares se mantiene el apoyo a la segunda opción, sigue la deslegitimación ciudadana hacia esa involución social y democrática de las políticas y la élite gobernante. No obstante, la presión cívica no consigue impedir los ajustes regresivos y se generan tendencias frustrantes al percibir el gran apoyo institucional, económico y mediático del bloque de poder y la dificultad para obtener avances en el terreno reivindicativo.

En el año 2011, a partir del 15 de mayo y en los meses siguientes, se desarrolla el llamado movimiento de los ‘indignados’ y se populariza esa expresión. Ante la persistencia de la gravedad de la situación y los recortes, emergen nuevos sujetos sociopolíticos, se incorporan nuevos sectores a la protesta social y se consolida con su doble carácter: democratizador (frente a la gestión política regresiva, opuesta a la opinión mayoritaria de la ciudadanía, y por la participación democrática y ciudadana) y con una perspectiva más social y progresista (contra los recortes socioeconómicos y laborales, la desigualdad social y las élites dominantes, y en defensa de los derechos sociales y democráticos).

Posteriormente, tal como se detalla más adelante, se mantiene esa amplia indignación popular, continúa el proceso de movilización global, aunque con altibajos y combinado con iniciativas locales o sectoriales, y se va modificando el protagonismo de distintos actores sociopolíticos.

Los movimientos sociales los podemos definir como:

Desafíos colectivos planteados por personas que comparten objetivos comunes y solidaridad en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades (Tarrow, 2012: 21).

De forma complementaria podemos decir que:

Un movimiento social no se reduce nunca a un conflicto de intereses; para que el empleo de esta noción esté justificado hay que añadir al conflicto la referencia común de los adversarios a unos 'retos', a unos objetivos, a unos recursos o a unos valores, como ya ocurrió con el movimiento obrero y el capitalismo industrial (Touraine, 2009: 117).

La protesta social progresista ha adquirido en España un nuevo carácter y una nueva dimensión (Adell, 2013; Antón, 2013a, y 2013c; Brito, 2013; Cruells e Ibarra, 2013; Del Río, 2012). Se han conformado nuevos actores y sujetos colectivos, con renovación de agentes sociales anteriores y participación de nuevos sectores, grupos y activistas, particularmente juveniles. La intensificación de la movilización sindical y ciudadana se inicia en el año 2010. Las primeras grandes manifestaciones populares de este periodo se producen ya en febrero y marzo de ese año, convocadas por los grandes sindicatos contra el primer gran plan regresivo del Gobierno de Zapatero (tras la primera crisis de la deuda griega y las presiones recibidas en Davos por el poder económico y los gobernantes europeos): el recorte de los derechos de las pensiones públicas. La mayoría de la sociedad, según encuestas de opinión, muestra su desacuerdo a ese recorte social y, tras la movilización social, se consigue su aplazamiento. Luego vino la huelga general del 29 de septiembre contra la reforma laboral y los recortes de mayo y junio.

Tras el parón movilizador producido a primeros del año 2011 por el acuerdo entre las direcciones de los grandes sindicatos y el Gobierno socialista en torno a la reforma de las pensiones y la orfandad representativa de la ciudadanía indignada y la izquierda social, en mayo del año 2011 se produce una amplia movilización ciudadana y se expresa un nuevo sujeto sociopolítico, el movimiento 15-M. Los motivos u objetivos de este amplio y diverso movimiento social expresan el rechazo a las políticas de austeridad y a una gestión política gubernamental regresiva y con gran déficit democrático. La indignación social frente a las graves consecuencias sociales de la crisis, la oposición a los recortes sociales y laborales y la crítica a los poderosos, los mercados financieros y la clase política gobernante, junto con la exigencia de democratización del sistema político y las decisiones institucionales, conforman una nueva dinámica sociopolítica.

Cristaliza una corriente social indignada frente a esos factores sistémicos, socioeconómicos y políticos, y se expresa un nuevo y heterogéneo sujeto sociopolítico, la ciudadanía activa progresista. Se refleja, por una parte, por el nuevo impulso de un movimiento sindical más crítico y movilizador, con masivos procesos huelguísticos de carácter general (tres huelgas generales en dos años) y sectorial (principalmente frente a recortes del sector público –enseñanza y sanidad- o reestructuraciones de plantillas); por otra parte, con la emergencia y la consolidación de un nuevo movimiento social (15-M y sus expresiones derivadas o similares y, más tarde, con nuevos actores y agrupamientos asociativos), democratizador y crítico contra las lacras socioeconómicas y los recortes de derechos sociales, con una intensa participación de jóvenes y una gran legitimación popular. Esta movilización social progresista se reafirma y confronta frente al bloqueo a las demandas populares y el incumplimiento del contrato social y electoral de los grandes partidos políticos, así como contra la gestión antisocial de los

gobiernos (primero del PSOE y luego del PP) y la orientación liberal-conservadora de las élites dominantes en la UE y la llamada Troika (FMI-BCE-CE). La opción que se refuerza es la incidencia ciudadana desde la propia esfera de lo social, de la presión en la calle, frente a las grandes instituciones (políticas y financieras), exigiendo su reorientación y democratización.

Por tanto, se trata de valorar los nuevos elementos de la realidad, los cambios en un doble plano, sociopolítico y cultural, del periodo actual. Se intensifica la movilización ciudadana progresista como respuesta a la política de austeridad de la clase política dominante. Se producen cambios en la conciencia social sobre el carácter poco democrático de un poder oligárquico, los responsables de la crisis y su gestión regresiva, así como de la legitimidad de la acción colectiva y la protesta social para cambiar esa dinámica. Existen elementos sociopolíticos y culturales distintos a los del periodo anterior, desde principios de los años noventa: 1) mayor activación de unos sujetos colectivos progresistas, con gran capacidad movilizadora y expresiva y, sobre todo, con gran legitimidad social; 2) afirmación de una cultura de justicia social, igualdad y democracia; 3) deslegitimación merecida de las grandes instituciones (económicas y políticas, incluidas las internacionales) y los políticos gestores de la austeridad, que privilegian sus intereses corporativos.

Lo específico de la etapa actual es que, junto con la continuidad de agentes y movimientos sociales anteriores, ha emergido un amplio y heterogéneo movimiento de indignación y protesta colectiva de orientación progresista. Se ha constituido frente al déficit democrático de las instituciones políticas que han aplicado una política de austeridad, agudizando las graves consecuencias sociales de la crisis socioeconómica. Es de carácter más sistémico o global, por su contenido y articulación, con nuevas interacciones con lo local, formas de comunicación y mentalidades. Ha ampliado las oportunidades de cambio social y de incidencia política, con el 'empoderamiento' de la propia ciudadanía. La reafirmación del 'sí podemos' es fundamental frente al fatalismo del 'no hay alternativas' y la resignación ante los recortes sociales y la gestión regresiva del poder político y la clase corporativa. Todo ello con una perspectiva histórica de su evolución y su impacto.

Por tanto, existen nuevas resistencias colectivas o movilizaciones sociales de carácter progresista, con unos contenidos u objetivos sociales y democráticos, frente a una grave situación material (lacas socioeconómicas ampliadas por la crisis económica y gestión regresiva de las principales instituciones políticas) y unos adversarios representativos del poder económico e institucional (financieros, clase gobernante, 'casta' o *corporate class*). Todo ello le confiere a este nuevo ciclo de la protesta social de unos elementos identificadores, con elementos comunes y de continuidad, y otros diferenciadores y específicos, sobre los que hay que profundizar.

Por último, un buen análisis es imprescindible para definir una posición normativa y poder participar mejor en la transformación de la propia sociedad. A la complejidad de la primera tarea analítica e interpretativa, se suman las dificultades derivadas de las implicaciones, intereses y procesos de legitimación de los distintos actores sociales y su papel sociopolítico. En particular, se pone a prueba la capacidad articuladora, coordinativa y de orientación de los grupos de activistas, núcleos asociativos o élites y personas más influyentes para consolidar el movimiento. Ello en

distintos planos: iniciativas generales y procesos de conjunto, arraigo local y movilizaciones específicas, legitimación popular y elaboración y unidad en torno a un cuerpo de ideas y objetivos comunes. Se trata de analizar la relevancia, el origen y las características de los últimos movimientos de protesta social, sus problemas y desafíos, para aportar al debate una perspectiva de futuro. Y para dar consistencia al análisis concreto se trata de combinarlo con la valoración crítica de las distintas interpretaciones teóricas para entresacar lo adecuado y lo no adecuado de sus enfoques.

2. Elementos novedosos del actual ciclo de protesta social e indignación

Este nuevo ciclo sociopolítico presenta novedades. Se inicia por el incremento de la importancia de la indignación y el descontento derivados de la gravedad de la desigualdad social, los factores socioeconómicos de la crisis y las políticas regresivas de austeridad, así como de la gestión antisocial y distanciada de la ciudadanía (y su electorado) del aparato del PSOE, que tiene inicialmente la responsabilidad institucional. La crisis social se combina con la deslegitimación de la élite gobernante y financiera (el poder o la clase dirigente) y una amplia resistencia popular. De ahí que la desafección hacia el Gobierno socialista (y después de la derecha) sea positiva y esté justificada por su giro regresivo, su orientación liberal-conservadora y su déficit democrático: incumplimiento de su contrato social y electoral. Aparece una corriente social indignada y una ciudadanía activa con una significativa conciencia de la justicia social y la democracia. Se produce un nuevo impulso y papel de los movimientos sociales y de la protesta social, así como de sus representantes o activistas.

Frente al alto desprestigio (80%) de los líderes gobernantes, la movilización social y, en particular, el movimiento 15-M goza de gran legitimidad: más del 60% de la población –superior entre la izquierda social y los jóvenes e inferior entre el electorado de derechas y los adultos-, ve bien sus objetivos e iniciativas (encuestas de *Metroscopia* en 2011 y 2012). Esta tendencia ciudadana que hemos definido por su actitud crítica en el campo social y económico tiene también, desde el principio, un impacto cultural y sociopolítico: conformación de una brecha crítica de desconfianza popular en la gestión gubernamental del PSOE, con fuerte deslegitimación de los gestores de la austeridad, apuesta cívica por otra orientación socioeconómica y de mayor democracia y reafirmación en los valores igualitarios, cívicos y de justicia social. Y, progresivamente, tiene impacto político: se transforma en gran desafección electoral hacia el partido socialista (más de cuatro millones) con ocasión de las elecciones generales de noviembre de 2011, y se consolida y amplía frente al conjunto del bipartidismo gobernante (treinta puntos) dando lugar a un amplio electorado indignado, con un ascenso relevante de Izquierda Plural y, especialmente, con la emergencia de Podemos. Una parte de esa corriente social indignada cristaliza en expresión político-electoral, con un tamaño similar a la del propio partido socialista, reequilibrio que supone una novedad en la historia de nuestra democracia y que refuerza la oportunidad de cambio sustantivo, político e institucional, no la mera alternancia del bipartidismo.

La particularidad de este proceso es que se articula, primero -2010-, en torno al sindicalismo, después -2011-, a través del movimiento 15-M, luego -2012/13- con una combinación de ambos, por separado aunque menos distantes y con algunas fórmulas mixtas como las mareas ciudadanas (enseñanzas, sanidad...) y la activación de iniciativas locales y sectoriales (desahucios...); por último, el cauce expresivo principal lo aportan diversos conglomerados asociativos en distintas plataformas o coordinaciones (23 de noviembre de 2013 y 22 de marzo de 2014). Y, finalmente, en las elecciones europeas, irrumpe el electorado indignado, con el refuerzo de un polo de referencia política a la izquierda de la socialdemocracia.

El movimiento sindical modifica su prolongada trayectoria de quince años de diálogo social y débil conflictividad laboral, por una actuación más crítica y movilizadora. Tiene un nuevo papel sociopolítico, al activar a sus bases sociales y a la izquierda social, inicialmente frente a un gobierno socialista y después contra el gobierno de la derecha en el año 2012. El movimiento 15-M irrumpe y cristaliza rápidamente, en torno a varios miles de activistas jóvenes y la participación, la comprensión y el apoyo a sus objetivos democráticos e iniciativas de denuncia, de un sector amplio de jóvenes, así como de la izquierda social y la ciudadanía indignada.

Por tanto, este nuevo ciclo de la movilización colectiva progresista, en cada uno de los tres primeros años desde su inicio, ha tenido una combinación diferente; en el cuarto año 2013 y lo que llevamos de 2014 presenta algunas particularidades. En su conjunto es una realidad más compleja, heterogénea y doble, que se puede englobar en un concepto más genérico como *ciudadanía activa*. En todo caso, como se detalla en otra investigación (Antón, 2011), ya en aquel otoño de 2010 y confirmado en la primavera de 2011, se produce un cambio cualitativo de escenarios o dinámicas sociopolíticas. O, como señalan otros autores (del Río, 2012), es un “*episodio mayor de la historia de la resistencia social*”, o un “*logro de particular importancia*”. Quedan atrás todas las interpretaciones promovidas desde la derecha y, específicamente, desde el aparato gubernamental socialista de entonces y los medios afines de comunicación, de infravalorar la dimensión y el significado sociopolítico, primero de la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y luego de las movilizaciones del 15-M en la primavera de 2011. La evidencia de la continuidad y la legitimidad de la protesta social, el paso del PSOE a la oposición parlamentaria y que el gestor institucional principal sea el PP, hacen que en el año 2012 una parte de los medios y sectores socialistas, que antes confrontaban contra esta movilización social, ahora sea más tolerante y objetiva con la valoración de este doble movimiento, sindical y ciudadano. Éste desarrolla un nuevo impulso participativo y de legitimación a pesar de la reacción airada de la derecha.

En los años 2013/2014, las grandes manifestaciones del 23 de noviembre de 2013 y el 22 de marzo de 2014 y el gran apoyo popular a la plataforma de afectados por los desahucios y distintos conflictos sociales, han demostrado la persistencia de este ‘movimiento’ y su gran legitimidad social, con un papel más secundario de los grupos de activistas del movimiento 15-M y de las direcciones de los grandes sindicatos. Igualmente, ha tenido una gran masividad y significado político la importante marcha por el cambio promovida por Podemos, el 31 de enero de 2015. No obstante, permanecen algunas incógnitas: la continuidad y la duración de las protestas

masivas por objetivos o motivos más generales; la promoción y la combinación con iniciativas locales o sectoriales enraizadas con asociaciones de base y reivindicaciones más concretas; el desarrollo de formas y relaciones organizativas más consistentes de redes y grupos sociales que avancen en representaciones unitarias; así como mantener su carácter plural y pacífico y evitar iniciativas minoritarias, violentas y contraproducentes, que pueden facilitar la disminución de su legitimidad, su aislamiento y la represión gubernamental.

A medio plazo parece que la situación general, socioeconómica e institucional, no tiene visos de mejora sustancial y que es previsible una prolongada etapa de crecimiento económico escaso y, sobre todo, de persistencia de un masivo desempleo, con cada vez menor cobertura de protección pública. Por mucho que la propaganda oficial insista en la recuperación económica, la realidad en la mayoría de la sociedad es la consolidación de los recortes sociales y laborales, la desigualdad y el paro masivo, la menor capacidad adquisitiva y la incertidumbre vital. Todo ello con la colaboración o responsabilidad de las élites gobernantes y la profunda desconfianza popular en su gestión. Las consecuencias sociales de la crisis y la política de austeridad se pueden agravar, y tener efectos más profundos y ambivalentes sobre la cohesión social, la integración social y cultural y la convivencia interétnica.

En definitiva, a pesar de todas las campañas de contención, minusvaloración y desprestigio, promovidas desde los poderes económicos e institucionales y sus correspondientes aparatos mediáticos, en los ámbitos progresistas, alternativos y de izquierda se ha conseguido un consenso amplio sobre la valoración positiva de esta nueva realidad de la protesta social o las resistencias colectivas, de su carácter democrático y social. Se asienta en su amplia legitimación social y el cuestionamiento a los políticos gobernantes.

La formulación de algunos lemas más o menos simbólicos o generales, tanto de los sindicatos cuanto del movimiento 15-M y otras plataformas, están unidos a estos contenidos e ideas fuerza, conectadas al nuevo contexto. Los dos ejes fundamentales del descontento social son: 1) políticas de austeridad, con una gestión política regresiva que empeora las consecuencias sociales de la crisis provocada por los mercados financieros; 2) déficit democrático de las grandes instituciones políticas y las élites gestoras. Los objetivos e ideas básicos están claros en el movimiento sindical desde el principio (*¡Así, no; Rectificación ya!*, y la ILP en defensa de los derechos sociolaborales, en otoño de 2010). Y también en el movimiento 15-M, cuyas alternativas concretas, desde su comienzo, se sitúan en los dos planos: a) intervención pública o regulación de la economía y derechos sociales y laborales (objetivos 2, 3, 4, 7, 10, 11, 12); b) democratización del sistema político y participación cívica (objetivos 1, 5, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 16)¹.

¹ Los objetivos aprobados en la asamblea de la Puerta del Sol, el 20 de mayo de 2011, son los siguientes: 1) *Cambio de la Ley Electoral*. 2) *Atención a los derechos básicos y fundamentales*. 3) *Abolición de las leyes y medidas discriminatorias e injustas* (Plan Bolonia, Ley de Extranjería...). 4) *Reforma fiscal favorable para las rentas más bajas*. 5) *Reforma de las condiciones laborales de la clase política... y que los programas y propuestas políticas tengan carácter vinculante*. 6) *Rechazo y condena de la corrupción*. 7) *Medidas plurales con respecto a la banca y los mercados financieros*. 8) *Desvinculación verdadera entre Iglesia y Estado*. 9) *Democracia participativa y directa*. 10) *Verdadera*

Esas ideas, razones o motivos están presentes en la mayoría de la gente y responden a problemas sustanciales de la sociedad. No son solo 'emociones' vaporosas o líquidas. Se asientan en unos valores de justicia social y permiten identificar las protestas sociales con un sentido progresista, pacífico, democrático y de izquierdas... y enfrentadas a los poderosos. Es una respuesta a realidades profundas y duraderas (sólidas), como la crisis social y la pérdida de derechos, la apropiación de riqueza y poder de los poderosos con fuerte desigualdad social y la deslegitimación del sistema político y la élite gobernante. Al mismo tiempo, expresan la aspiración a una dinámica más justa y democrática.

Podemos resumir cuatro retos existentes para las sociedades europeas, particularmente del Sur, como España: 1) derrotar la austeridad y sus gestores gubernamentales, terminar con la hegemonía institucional del bloque de poder conservador representado por Merkel y la Troika, para promover una vía clara de crecimiento económico y de empleo decente, sin subordinación a los mercados financieros y con la defensa de los derechos sociolaborales y las prestaciones y servicios públicos; 2) profundizar en la democratización de los Estados y, especialmente, de las instituciones europeas, con el refuerzo de las garantías democráticas, la participación ciudadana y la propia sociedad civil, así como la renovación de la política y su representación institucional; 3) revertir la profunda brecha entre el Norte (acreedor) y el Sur (deudor) y construir una Europa más social y solidaria; 4) disminuir la desigualdad (socioeconómica y de estatus) y favorecer la integración social y la convivencia pacífica desde la interculturalidad y frente a la xenofobia, la segregación y la segmentación de la sociedad.

Es ineludible abordar los procesos de conformación y ampliación de una alternativa política unitaria, progresista y de izquierdas. Pero su plasmación es más específica y exige más finura en la articulación de intereses y propuestas. Supone un ejercicio también de renovación y aprendizaje para superar sus límites actuales. No es fácil; se arrastran dificultades de diverso tipo, para cuya superación habrá que desarrollar las mejores cualidades democráticas y éticas de esos aspirantes a la nueva representación política.

Pero el factor decisivo para garantizar un proceso de cambio social y, también, político institucional será la continuidad y el fortalecimiento de un poderoso movimiento popular, con un carácter social y democratizador y gran legitimidad ciudadana, con una fuerte 'dignidad' cívica, frente a la indignidad de los poderosos. La protesta social progresista ha tenido como blancos, sobre todo, las dos primeras problemáticas, la desigualdad socioeconómica con los recortes sociales y la política de austeridad, y el déficit democrático de las instituciones públicas y las élites gobernantes. Ha abordado parcialmente la construcción europea. Y apenas se ha debatido en España (a diferencia de otros países europeos) la necesidad de políticas y dinámicas interculturales e integradoras para afrontar esa realidad de desigualdad y

regularización de las condiciones laborales. 11) Cierre de todas las centrales nucleares y la promoción de energías renovables y gratuitas. 12) Recuperación de las empresas públicas privatizadas. 13) Efectiva separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. 14) Reducción del gasto militar... y mayor control de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. 15) Recuperación de la Memoria Histórica. 16) Total transparencia de las cuentas y de la financiación de los partidos políticos.

marginación. El principal reto de este movimiento social es su consolidación como agente sociopolítico emancipador e igualitario, con la vertebración de la ciudadanía activa, cierta estabilidad organizativa y una capacidad de representación y liderazgo de la sociedad más crítica. Es la apuesta más difícil, pero más segura para caminar hacia una Europa más justa, solidaria y democrática. La protesta social progresista tiene motivos y condiciones para continuar. La participación activa de la ciudadanía también es un factor democratizador imprescindible. La consolidación de este campo social crítico es un factor fundamental para avanzar en los otros dos desafíos globales: la renovación y el refuerzo de las izquierdas y fuerzas alternativas, y el impulso del cambio social, político e institucional en España y la Unión Europea.

3. Representación y pluralismo

El proceso de indignación ciudadana y protesta social, así como la conformación de un electorado indignado, ponen de relieve la importancia de la configuración de una representación, social y política, democrática, progresista y plural. En particular, se ha abierto la posibilidad de la consolidación y convergencia de distintos grupos sociales y políticos transformadores y la oportunidad de fortalecer una alternativa a la izquierda de la socialdemocracia, con un reequilibrio de su tradicional hegemonía institucional. Se han ampliado las expectativas de desalojo institucional de las derechas y cambio político.

Por tanto, la configuración de un conglomerado social y político alternativo y una representación doble, social y político-institucional, es una tarea inmediata y compleja. Es un tema controvertido, sujeto a debates e interpretaciones distintas. Exige una fuerte actitud democrática, unitaria y, al mismo tiempo, respetuosa con el pluralismo y la diversidad. Está condicionado por los intereses específicos de cada individuo, grupo o estamento social, así como por sus distintas experiencias y tradiciones organizativas, políticas y teóricas. Uno de los elementos fundamentales es las características de los grupos de activistas o élites asociativas con influencia en las movilizaciones populares y en la representación política. Aquí se aporta una reflexión general de las circunstancias y el enfoque adecuado para su abordaje.

La representación social de la ciudadanía activa es diversa y mixta. Por una parte, se asienta en el tejido asociativo anterior y está vinculada a las tradiciones de los movimientos sociales anteriores y las izquierdas. Por otra parte, participan componentes nuevos o renovados con ideas mixtas o eclécticas, dentro de valores democráticos y de justicia social. Todo ello contando con procesos complejos de interacción, internos –dentro de ese conglomerado sociopolítico- y externos –en su relación con el poder institucional y económico-.

Igualmente, tal como expresaron ya los resultados de las elecciones europeas, la representación política de la población indignada también es diversa. Los hechos más significativos en este campo, aparte del descenso del apoyo social a la derecha y su política liberal-conservadora, son tres: la debacle electoral del partido socialista, necesitado de una profunda reconversión política e ideológica y una renovación de su aparato, sus mecanismos organizativos y su liderazgo; el fortalecimiento de una alternativa político-electoral a la izquierda de la socialdemocracia, todavía dividida en

varias referencias, con una responsabilidad particular para Izquierda Plural, y formando parte de ese ascenso crítico, la emergencia de una nueva opción, Podemos, expresiva de gran parte de la indignación ciudadana y su deseo de cambio profundo, socioeconómico y político-institucional.

La necesidad evidente de construcción de representaciones, coordinaciones o liderazgos unitarios y democráticos está condicionada por la tensión entre los distintos intereses particulares de sectores y posiciones de influencia, así como por las dificultades derivadas de la competencia intergrupal, la inexperiencia organizativa o las distintas capacidades comunicativas o de liderazgo. Igualmente, hay que tener en cuenta las deficiencias de esquemas de pensamiento más o menos esquemáticos o prácticas organizativas anquilosadas, dependientes de situaciones o tradiciones anteriores. Además existen problemas para elaborar, deliberar y decidir orientaciones complejas, de conjunto y a medio plazo, así como autónomas y críticas respecto del pensamiento liberal dominante y los grupos de poder.

Se pueden diferenciar tres niveles de indignación y participación: corriente social indignada, crítica pero pasiva; ciudadanía activa o movimiento de protesta social, y grupos de activistas, 'militantes', promotores o representantes. Esa distinción afecta a un aspecto teórico y organizativo: la valoración de la democracia y, en particular, de sus dos formas, la directa y la representativa. Partimos de la importancia de las dinámicas participativas, la reafirmación de las propias capacidades humanas y los valores democráticos, anti-jerárquicos y anti-burocráticos. Frente al autoritarismo y el déficit democrático de las clases gobernantes y la actuación prepotente de grandes instituciones estatales o administrativas, es fundamental reafirmar la participación cívica, el respeto de las élites políticas y económicas a la voluntad expresada por la sociedad y el cumplimiento de su contrato social y político con la ciudadanía.

Así mismo, existen grandes organizaciones sociales y políticas, con amplias estructuras de gestión, dirección y asesoramiento, con regulaciones y procedimientos diversos y siempre con la tensión entre los intereses específicos de los aparatos y la realización de la misión de la organización en beneficio de la ciudadanía y sus propias bases sociales. Con niveles bajos de participación de la población, la inclinación de los 'mediadores' o élites asociativas hacia dinámicas burocráticas y jerarquizadoras son mayores. La solución es doble: cuidar las dinámicas organizativas democráticas, e impulsar el dinamismo participativo en la acción sociopolítica que estimule la participación ciudadana y el interés por la 'cosa' pública.

Las expresiones autogestionarias y de democracia directa se pueden ampliar con mecanismos asamblearios, consultivos y decisorios. Pero, ante situaciones, estructuras, dinámicas sociales y realidades organizativas complejas es necesaria también la democracia representativa o delegada; siempre sometida esa representación y su labor ejecutiva al escrutinio y la participación de su base representada. Los recursos, oportunidades, capacidades y disponibilidad de las personas no son iguales. Es preciso impulsar la igualdad en los procesos participativos, los derechos iguales en la información, las deliberaciones y la elaboración de las decisiones. Pero ello no se consigue de forma inmediata y generalizada y permanecen distintos grados de posibilidades e implicación de personas y grupos, por sensibilidades o intereses. No se trata solo de la imprescindible división de funciones o

especialización de tareas, en el plano horizontal y con una coordinación simple. Sino, sobre todo, de evitar posiciones jerárquicas, reconocidas o no, de mayor o menor capacidad de influencia, poder o dominación. Es necesario reconocer esas desigualdades para abordarlas y arbitrar mecanismos que las palien en un sentido igualitario y democrático.

La experiencia inmediata de la gente activa también es variada. Por una parte, la existencia y la participación de grandes estructuras organizativas (desde las administraciones públicas hasta los grandes partidos políticos, sindicatos o asociaciones); todo ello reporta una posición diferenciada en distintos niveles de poder, jerarquía y división de funciones. Por otra parte, la emergencia de pequeños grupos, más o menos estables e inmediatos, con procesos deliberativos y operativos directos y a pequeña escala, aunque pudiendo ser acumulados con mediaciones orgánicas o en red.

La articulación de un movimiento amplio, diverso, complejo, duradero y con grandes retos y dificultades exige una representación y una coordinación específicas, vinculadas a la gente activa pero en conexión comunicativa, real y simbólica, con la mayoría indignada de la sociedad, contando con dinámicas organizativas diferenciadas. La no distinción entre esos niveles genera un problema adicional: la creencia de ser todo y todos lo mismo, la consideración de que los activistas o portavoces están plenamente identificados con la opinión del conjunto del movimiento o de la mayoría de la sociedad, la convicción de que las ideas propias siempre y en todos los aspectos son representativas de la base popular que apoya o legitima sus principales iniciativas u objetivos, la negación de la diversidad o las diferencias dentro del mismo conglomerado sociopolítico y, en consecuencia, el no respeto a su pluralismo interno.

La ausencia del reconocimiento de esa relación problemática entre representación, movimientos sociales y corriente indignada no permite resolver bien las dificultades de su interacción, la elaboración de propuestas que sirvan para estimular la participación ciudadana, y fortalecer el enraizamiento de la gente activa con las opiniones y demandas de la mayoría de la sociedad. En el plano institucional, puede llevar a infravalorar la importancia de las mediaciones políticas y electorales, el abordaje del cambio institucional y político o el avance progresivo en la calidad democrática del Estado y sus instituciones (más o menos) representativas.

Por último, otro aspecto fundamental derivado de esta valoración de la democracia es la interacción entre representantes y representados. Una vez aceptado la no correspondencia mecánica o esencialista entre sujeto social y representación (activistas, élite, 'militantes' o vanguardia), debemos admitir la diversidad de posiciones e ideas de la gente, también en el seno de los grupos más activos. Por tanto, es necesario el respeto al pluralismo y el reconocimiento de la diversidad cultural, social, política e ideológica dentro de un amplio movimiento popular, para arbitrar, precisamente, mecanismos democráticos y unitarios para elaborar consensos y compartir proyectos comunes o garantizar la convivencia ante los desacuerdos. La aspiración razonable a la unidad no debe imponer la homogeneidad ni hacer prevalecer la hegemonía del núcleo con mayor poder e influencia con exclusión de las opiniones divergentes o minoritarias.

En definitiva, para la conformación de unas redes y organizaciones amplias, diversas e interactivas y, todavía más, de grupos o núcleos promotores y con aspiración al liderazgo sociopolítico en el necesario y complejo proceso de conformación de un bloque social y político progresista y alternativo, se necesitan las mejores cualidades éticas y democráticas y el compromiso y la lealtad por los proyectos comunes de defensa de los derechos sociales, la democratización y la participación cívica.

4. Clases dominantes, corrupción y su desprestigio social

El bloque de poder hegemónico ya existía antes del comienzo de la crisis económica, en su doble composición e imbricación: económico-financiero y político-institucional. En los últimos años ha acentuado su carácter oligárquico y regresivo. Su existencia se ha hecho evidente ante la mayoría de la población que cuestiona su orientación liberal-conservadora, basada en la austeridad y los recortes sociales y laborales, y su desconsideración prepotente de las opiniones y demandas de la ciudadanía.

El aparato productivo y económico español y, en particular, las grandes empresas del IBEX-35, han estado dominados, desde el franquismo, por una oligarquía de familias. Las mayores diferencias, respecto de hace unas décadas, son dos: por una parte, su superior grado de concentración, internacionalización y privatización -ha desaparecido, prácticamente, el sector público empresarial-; por otra parte, se ha incrementado el nivel de propiedad y control por el capital extranjero, que alcanza a la mitad de su valor en Bolsa. Las empresas más potentes del sector industrial, empezando por la automoción y la siderurgia, están controladas por multinacionales extranjeras -que no cotizan en la Bolsa española- (con algunas excepciones como Inditex-Zara, con externalización de su producción hacia países con mano de obra barata, o la CAF, de capital vasco). Igualmente, ocurre con empresas de otros sectores como la gran distribución comercial (salvo El Corte Inglés). Las grandes empresas 'españolas' son del sector de servicios financieros (Bancos Santander, BBVA y Caixa), energía y eléctricas (Repsol...) o construcción. La propiedad y el control de éstas, a pesar de que sus principales figuras gestoras son españolas, están cada vez más en manos del capital extranjero. El aparato económico español y su modelo de desarrollo, comparados con las economías europeas centrales, adolecen de graves problemas de especialización y modernización productiva, con productos y empleos de baja calidad y cualificación, unos costes laborales baratos y un mercado de trabajo frágil y precario. La *financiarización* de la economía (Alonso y Fernández, 2012; Antón, 2013b) y su falta de modernización (Navarro, 2006), en el actual contexto de crisis y estancamiento económico de la eurozona, hacen más necesario un cambio de modelo, más sostenible, y unas reformas profundas para su mejora (Flores, 2014; Navarro et al., 2011).

Un ejemplo de la conexión de estas élites dirigentes, financieras y políticas, se ha producido en la nefasta y rapaz gestión de las cajas de ahorro, que constituían la mitad del sistema financiero. Las capas gestoras de algunas de las más relevantes se han dedicado a la actividad especulativa y la apropiación de recursos, cuando no a la

estafa directa (preferentes), en su beneficio y el del mundo empresarial amigo. El agravante es que eran instituciones públicas y sus equipos directivos estaban nombrados y avalados por las instituciones autonómicas y locales. Su incompetente gestión se ha centrado, estos años atrás, en la especulación inmobiliaria y la construcción, lejos de ser motores de la modernización económica de sus territorios y la función social de sus objetivos. Han privilegiado sus intereses corporativos y los de un entramado empresarial más especulativo.

En particular la Caja de Ahorros de Madrid y Bancaja, unidas en Bankia, eran dependientes del poder institucional del PP en la Comunidad de Madrid y la Comunidad valenciana. Así mismo, la Caja de Catalunya dependía de la Diputación de Barcelona, con largo control del PSC, y la Caja Castilla-La Mancha de sus gobiernos autónomos, con prologado dominio anterior del PSOE. Curiosamente, en estos dos últimos casos, aparece la responsabilidad de un ministro socialista de Defensa: en el primero, Narcís Serra, del primer Gobierno de Felipe González, responsable directo como Presidente de la entidad durante largo tiempo; en el segundo, José Bono, del Gobierno de Zapatero, responsable indirecto, varias décadas, como Presidente autonómico que controlaba el nombramiento de su equipo gestor. Además, habría que incluir las responsabilidades políticas y la deficiente gestión supervisora, empezando por el Gobernador del Banco de España, en los momentos álgidos, el socialista Fernández Ordoñez. El grueso del rescate financiero de la UE ha servido para salvar de la insolvencia y la quiebra a estas cajas (más de cincuenta mil millones de euros utilizados) y ese plan se ha utilizado como pretexto por la Troika y el Gobierno de Rajoy para imponer duros recortes sociales en sanidad, educación y prestaciones de desempleo, precisamente de un importe similar a esa cantidad.

La vinculación entre esa casta gerencial y esa clase gobernante, ha servido para aprovecharse ambas de unas instituciones públicas en beneficio de una minoría, repartiendo prebendas y privilegios de forma ilegítima y muchas veces ilegal. Supone una responsabilidad compartida, fundamentalmente, por ciertas élites de PP y PSOE en las causas inmediatas del fiasco de esas cajas de ahorro. Y también de sus consecuencias inmediatas, incluido lo más sustancial del pago de ese rescate a costa de los contribuyentes y los efectos sociales, económicos y laborales. Igualmente ha ocurrido con su privatización posterior, con su venta al gran capital financiero privado que se ha frotado las manos por su compra a precios de saldo de esa mitad pública del sistema financiero. No es de extrañar el pacto de silencio de las cúpulas de ambos partidos para evitar la denuncia pública y la exigencia de responsabilidades, penales y políticas, de sus principales gestores y las instancias que lo permitieron y avalaron.

Citamos otros ejemplos significativos sobre la corrupción existente en la que están implicadas cúpulas de varias instancias políticas: La dirección del PP, con el caso Bárcenas y su financiación irregular, con ventajas para la competencia electoral y condicionamientos para su gestión; la dirección de Convergencia de Cataluña, con el ex-honorable ex-presidente de la Generalitat, Jordi Puyol y su entramado familiar, político y empresarial, o responsables relevantes de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana (PP), con el asunto Gurtel, y de la Junta de Andalucía (PSOE), con los ERE, las subvenciones a la UGT y los cursos de formación; así, según una encuesta de la cadena SER (4 de septiembre de 2014) el 64% de los entrevistados

desaprueba la actuación de la Junta de Andalucía en relación con esos casos de corrupción.

Mencionamos sucintamente otros dos casos de fuerte impacto mediático: Uno, el caso Urdangarín, que afecta a la Casa Real; otro, uno de los entramados más profundos y mafiosos en el ámbito local, el caso Malaya en Marbella. No es de extrañar que el juez instructor de este último proceso, Miguel Ángel Torres Segura, diga que “En España hay corrupción política institucional, de arriba abajo” (diario *El País*, 24 de agosto de 2014).

En un primer nivel están los delitos de fraude, apropiación ilícita de recursos y poder y tráfico de influencias con el mundo empresarial, con la responsabilidad penal de los ejecutores directos, corruptos y corruptores. En un segundo nivel, está la responsabilidad política de unos dirigentes institucionales y unos organismos, faltos de transparencia y determinación en el control democrático en beneficio de la sociedad. No han cumplido su función de evitar comportamientos ilegales y deshonestos, así como la apropiación privada y corporativa ilegítima de una casta gerencial e institucional a costa de desventajas para la ciudadanía. Son, pues, un ejemplo de estructuras enfermas, llenas de complicidades y sin garantías democráticas de control y supervisión, más opacas y enraizadas cuando se han producido en instituciones con una larga hegemonía institucional por uno de los partidos gobernantes y sin, siquiera, apenas alternancia. Necesitan una limpieza profunda. Y la responsabilidad global también llega a las cúpulas gobernantes, por la inadecuación o inaplicación de las leyes y los mecanismos de control, la permisividad con el fraude y las insuficiencias de la judicatura y los distintos instrumentos de inspección y persecución del delito. Además de la obligación de la devolución de lo robado, el resarcimiento a las víctimas de especuladores, defraudadores e incompetentes maliciosos y, finalmente, de cumplir las penas de prisión, de la que se suelen escapar los ricos y poderosos. Todo ello para fortalecer el Estado de derecho y la democracia, empezando por la aplicación estricta de la ley.

Para completar el análisis conviene señalar la opinión ciudadana sobre las principales instituciones. En un reciente estudio realizado en julio de 2014 por *Metroscopia* (López Vega, 2014) se ha evaluado la opinión ciudadana sobre las principales instituciones, entidades y grupos sociales. Sus datos más relevantes han sido adelantados por el diario *El País* (17 y 24 de agosto de 2014). La pregunta es sobre “si **evalúan de forma positiva** la contribución que, con su funcionamiento, hacen al bienestar público...”. Los porcentajes de aprobación ciudadana (en paréntesis los de julio de 2013) indican una diferencia sustancial entre, por un lado, la aprobación por más del 70% de la población de la función de las instituciones públicas y sociales dedicadas a la atención de la sociedad y, por otro lado, la aprobación escasa, menos del 30% (o sea, suspenso), de las altas instituciones económicas y políticas, es decir, los poderosos. En la primera categoría, de instituciones sociales, los resultados son los siguientes: *investigadores científicos*, 89% (92%); *médicos de la Sanidad Pública*, 85% (92%); *profesores de la enseñanza pública*, 81% (85%); *Cáritas*, 75% (74%); *ONG, las asociaciones voluntarias*, 70% (75%), y *servicios sociales municipales*, 60% (64%). Hay que resaltar también otras instituciones estatales y económicas que cuentan con un alto grado de aprobación: *Pequeñas y medias empresas*, 70% (90%) –que ha

descendido mucho-; *rey Felipe VI*, 68% (47%) -que ha ascendido respecto a su padre, el rey Juan Carlos I, al que se refería la encuesta el año anterior-, y *Guardia Civil*, 72% (85%) y *policía*, 69% (83%) –que también han descendido significativamente-. En el otro extremo los menos valorados son, por un lado, las grandes instituciones económicas: *bancos*, 10% (15%); *patronal*, 20% (21%); *multinacionales*, 17% (33%) y *grandes empresas españolas*, 29% (46%). Y, por otro lado, tienen una mínima aprobación (máxima desaprobación) las grandes instituciones políticas: *partidos políticos*, 10% (12%); *políticos*, 10% (6%); *Gobierno*, 21% (21%); *Parlamento*, 29% (24%); *Ayuntamientos*, 31% (40%), y *Comunidades Autónomas*, 34% (41%) –estas dos últimas con un descenso significativo.

La poca legitimidad ciudadana de partidos políticos y ‘políticos’ supone un cuestionamiento cívico a su actual función regresiva, juzgada por su carácter antisocial frente a las demandas mayoritarias de la sociedad. En este sentido, hay que recordar que cuando la ciudadanía critica o desaprueba a los políticos o su actuación política se están refiriendo, sobre todo, a la gestión institucional actual de la clase política gestora, fundamentalmente, a las élites o los aparatos de los grandes partidos (bipartidismo) con responsabilidades gubernamentales en los recientes planes de ajuste y austeridad y con incumplimiento de sus compromisos sociales y democráticos con sus electorados y bases sociales. Esas cúpulas, que suelen apropiarse de la representación del conjunto de sus organizaciones, y su actuación son los destinatarios de la desconfianza ciudadana (ver el estudio 2916 del CIS, de octubre de 2012 sobre *El sistema de los discursos sociales de izquierda y derecha en España*). Es decir, la crítica popular no se realiza al conjunto de políticos o representantes y a toda su actividad, y menos a la acción política como participación ciudadana en los asuntos públicos, sino específicamente a las capas dirigentes y su gestión institucional regresiva y poco democrática.

Un caso especial es el poco prestigio de los sindicatos, cuya aprobación ciudadana incluso ha descendido: 17% (28%). No obstante, al igual que con los partidos políticos, la población está valorando la actuación de las cúpulas sindicales que son el símbolo y los responsables de su gestión global. En particular, quizá tenga una relevante influencia negativa la responsabilidad de los dirigentes de UGT de Andalucía, ante los asuntos de los ERE y la Formación ocupacional y, posteriormente, la utilización de las tarjetas ‘negras’ por los representantes sindicales en el Consejo de Administración de Bankia. En todo caso, existe un distanciamiento social a su actual estrategia contemporalizadora y de búsqueda de un diálogo social sin garantías de avances para la población trabajadora. En el último año su actuación no parece que les permita mejorar su imagen pública, ya limitada. En esta valoración la referencia para evaluar la conexión con sus bases de afiliados y electores más directos debería ser, sobre todo, la población asalariada y, en particular la de las medianas y grandes empresas, donde se sitúan los principales núcleos sindicales, pero no hay datos desagregados. En ese ámbito es de suponer que esos pequeños porcentajes de aprobación serían superiores, pero aun así las direcciones sindicales tienen un grave problema de falta de legitimidad ciudadana, especialmente entre los jóvenes e, incluso, en una parte relevante de su base social asalariada y desempleada.

Por otro lado, siguiendo con el mismo estudio, tenemos otros resultados significativos. A la cuestión *El gobierno está sabiendo hacer frente de forma adecuada la actual situación económica*, la respuesta es **SÍ, 21%; NO, 74%**. A la cuestión *España es hoy un país que se preocupa por el futuro de las nuevas generaciones*: **SÍ, 23%; NO, 75%**. Y a la afirmación *España necesita una segunda Transición que, con el mismo espíritu de pacto y concordia de la primera, modifique y actualice muchos aspectos de nuestro actual sistema político*: **SÍ, 75%; NO, 19%** (Resto hasta 100 corresponde a *No sabe/No contesta*). Tres cuartas partes de la población cuestionan la gestión gubernamental, perciben el desamparo particular hacia el futuro de los jóvenes y demandan un cambio profundo del sistema político, una nueva Transición, o sea, un nuevo proceso constituyente, aunque en la pregunta se ponga énfasis en que sea pactada. Así, podemos decir, junto con el comentarista del estudio (José Juan Toharia, presidente de *Metroscopia*, diario *El País* 17-8-2014), que *-la ciudadanía- lleva ya demasiado tiempo sintiéndose desatendida en dos reclamaciones que considera básicas y urgentes: una explicación clara (y, con ella, una salida justa) de la crisis económica y una regeneración, a fondo, de nuestra vida política.*

Estas valoraciones críticas de la mayoría de la sociedad ante la gestión impopular y prepotente de las capas dirigentes de las grandes instituciones políticas y económico-financieras, no son nuevas y confirman análisis anteriores (Antón, 2013a: pp. 171-190). Es una tendencia cívica que aparece ya en el año 2010 frente a la política de austeridad, que se consolida y refuerza en el último periodo de control institucional del PP, a pesar de todos sus intentos mediáticos de justificar sus 'reformas estructurales' y publicitar que estamos en otra fase de recuperación económica. Incluso, lejos de conseguir su pretendida imagen de regeneración democrática o transparencia, con su ley de seguridad ciudadana y sus rasgos autoritarios imponen un retroceso en derechos civiles básicos, como los de manifestación y reunión. Igualmente, su plan de elección directa de alcaldes, sin contar con el aval de la representación mayoritaria de la ciudadanía y añadiendo un plus institucional a la lista más votada pero solo con mayoría simple, cuestionaba la legitimidad representativa del poder municipal. Consolidaba la amplia opinión social de la actuación prepotente del gobierno de Rajoy, solo interesado en perpetuar su poder institucional incumpliendo los criterios democráticos básicos, de respeto a la 'mayoría' de la representación ciudadana en los consistorios municipales, que es quien tiene la legitimidad democrática para nombrar el alcalde y definir la gestión municipal. Finalmente, ante esas evidencias, se han echado atrás.

Por tanto, esa actitud crítica de la mayoría de la sociedad hacia las élites gobernantes y el poder económico-financiero, es positiva, justa y merecida. No se puede tachar de 'antipolítica', ni de 'antidemocrática', descalificaciones que pretenden frenar su impacto regenerador y transformador. Todo lo contrario, esa amplia tendencia cívica de indignación es expresión de una cultura popular progresista, fundamentada en valores democráticos y de justicia social. Es un factor de deslegitimación del *establishment* y de regeneración democrática de las instituciones políticas. En particular, es un síntoma del desgaste del sistema gobernante bipartidista y, especialmente, constituye un fuerte emplazamiento a la dirección del partido socialista para un cambio profundo de estrategia política. Sigue dando cobertura

legitimadora a un imprescindible movimiento popular o ciudadanía activa y favorece el desarrollo de grupos alternativos y de izquierda y políticas progresistas. Refuerza la democracia y promueve la reorientación social de la política socioeconómica, en defensa de los derechos sociales y laborales.

En definitiva, la fuerte actitud democrática e igualitaria de esa ciudadanía indignada y crítica tiene suficiente consistencia y duración como para hablar de la configuración de una corriente social de carácter progresista. Muestra su desacuerdo con la minoría oligárquica, empeñada en una gestión antisocial de la crisis sistémica, con componentes autoritarios, y que tiene un gran poder institucional, económico y mediático, pero poca legitimidad ciudadana.

5. Conflicto social: movimiento cívico frente al poder

En este último periodo de crisis, el poder económico e institucional dominante ha acentuado sus rasgos oligárquicos, regresivos y autoritarios. En primer lugar, con la explosión de la burbuja inmobiliaria y la evidencia de la especulación financiera, año 2008, el poder financiero apareció públicamente como responsable de su origen y sus graves consecuencias sociales: desempleo, desigualdad, devaluación salarial, empobrecimiento popular y exclusión social. En segundo lugar, sobre todo, a partir del año 2010, el poder político dominante en la UE impuso una estrategia liberal-conservadora, trasladando la prioridad de la recuperación del empleo y la desigualdad hacia la reducción de la deuda pública y el déficit público, mediante la gestión regresiva basada en la austeridad. Sus efectos antisociales se ampliaron: paro masivo, recortes sociales y laborales y desmantelamiento del Estado de bienestar, particularmente en el sur europeo. El bloque de poder conservador (representado por Merkel y la Troika –Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo monetario Internacional-) ha profundizado la desigualdad social y ha impuesto una política impopular, con desprecio hacia la opinión de las mayorías sociales. Ha acentuado la crisis de legitimidad de las instituciones y los gobiernos europeos, así como perjudica la cohesión de sus sociedades y la propia construcción europea.

El poder político tiene un doble componente: democrático-representativo y oligárquico o de dominación. Pero, en esta etapa, se ha producido un cambio sustancial en su equilibrio, en el peso cualitativo de cada uno de los dos elementos. Sigue siendo ambivalente, ya que se mantienen los mecanismos básicos de una democracia (débil) y el Estado de derecho. No obstante, su característica de aparato y capa de dominación antisocial se ha reforzado y, lo que es más significativo, los poderosos financieros e institucionales han sido percibidos así por la mayoría de la población. Las élites dominantes (la *corporate class* que usan en EE.UU.), que controlan y gestionan el poder económico-político, pierden el prestigio y la legitimidad derivados de su supuesta representación del interés de la sociedad o el bien común, más o menos avalada en las urnas. Ahora se asocian más a su papel para ampliar sus ganancias privadas, la redistribución desigual de la riqueza y el poder en su beneficio y en perjuicio de la mayoría popular. Y, en algunos casos, son denunciados por su falta de respeto a la legalidad vigente y su comportamiento corrupto. Este segundo rasgo, dominante, autoritario y contrario a la democracia y el bienestar de la población, se ha

hecho más evidente ante la sociedad. Su carácter impopular y distanciado de la opinión ciudadana se ha reforzado, en particular en el ámbito financiero desregulado. También han perdido credibilidad las principales instituciones europeas, con gran autonomía respecto de los organismos representativos y democráticos y fuerte dependencia de los grandes inversores privados. Los poderosos están imponiendo, particularmente a los países del sur europeo (incluyendo a Italia y Francia) una gestión antisocial, incumpliendo su contrato social y electoral con la ciudadanía y debilitando los mecanismos democráticos de participación y control.

En los años treinta del pasado siglo, ante la Gran Depresión y la hegemonía del liberalismo económico, ya se planteó el debate sobre el conflicto entre capitalismo y democracia. Al final la solución propuesta para mantener una compatibilidad más o menos equilibrada fue el Estado social (Álvarez-Uría y Varela, 2004). Aquella crisis económica, social y política desembocó en la II Guerra mundial, con la victoria de los aliados de las democracias occidentales y el bloque soviético frente a los fascismos, y se superó, en la Europa democrática, con el pacto keynesiano y el Estado de bienestar. Este equilibrio, con fuerte desarrollo económico capitalista, corregido con cierta redistribución pública y protección social, permitió mejorar las condiciones de vida de las clases medias y trabajadoras y contener la desigualdad.

Este Estado social y democrático adquirió una gran legitimidad social, así como las principales instituciones representativas y ejecutivas. Se mantuvo varias décadas, pero se empezó a cuestionar desde finales de los años setenta por las fuerzas conservadoras (Reagan y Thatcher). La involución social se aceleró con la globalización y las políticas neoliberales en los años noventa. Todavía manteníamos en Europa el llamado 'modelo social', con una significativa protección social, derechos sociolaborales y prestaciones y servicios públicos, más débiles en los países periféricos como España.

Pues bien, con ocasión de la actual crisis socioeconómica, las élites dominantes, la oligarquía económico-financiera e institucional, lejos de asumir sus responsabilidades por la crisis y respetar las demandas ciudadanas, pretenden imponer otro reequilibrio regresivo que les garantice el reforzamiento de la acumulación de su poder y su riqueza en perjuicio de la mayoría de la sociedad, a la que imponen mayor subordinación y pérdida de derechos. Tienen un inmenso poder y pueden permitirse el lujo de mantenerlo aun con poca legitimidad social o credibilidad popular. Es un problema para ellos, pero menor, que intentan paliar con la correspondiente ofensiva mediática y el control social, con un contenido tecnocrático y conservador y su desdén hacia la participación democrática de la gente. Sin embargo, lo que es más grave para ellos es que ese proceso de deslegitimación popular se pueda convertir, mediante la protesta social y la influencia política, en un desafío para la estabilidad de su control económico y su dominio institucional. Esa posibilidad se ha abierto en España (también en Grecia), su alarma se ha acrecentado y la pugna sociopolítica y cultural se ha ido agudizando.

En consecuencia, el comienzo de la polarización socioeconómica y sociopolítica se ha producido por la actuación regresiva y autoritaria del poder oligárquico. El grave impacto de la crisis, con la culpabilidad de la especulación financiera y la corresponsabilidad de los altos gestores institucionales al crear el marco desregulador

de los mercados y ejecutar la estrategia liberal-conservadora de la austeridad, ha dado mayor peso a esos rasgos antisociales y corporativos del poder económico y político. Y ha adquirido una mayor relevancia pública su distancia con los intereses y demandas de la ciudadanía, su apropiación de beneficios y privilegios y sus componentes autoritarios y poco democráticos. Por supuesto, si no hubiera habido indignación popular y resistencias ciudadanas no se habría producido polarización sociopolítica. Se habrían aumentado las desigualdades y las brechas económicas y sociales, la polarización socioeconómica, pero con el sometimiento, la resignación y la simple adaptación popular no habría cristalizado la polarización en el campo sociopolítico. Era la expectativa de las clases dominantes, incluso su referencia para la gestión y la salida de la crisis. Un reequilibrio de poder y riqueza a su favor, con una subordinación de la mayoría de la sociedad y sin capacidad de respuesta popular y menos de desestabilización de su poder institucional. Las llamadas al consenso y la responsabilidad de Estado pretenden normalizar esa situación más desigual pero con menor oposición social, conflicto sociopolítico y capacidades alternativas.

El antagonismo o la dicotomía se han ido conformando de forma relacional e histórica, con el comportamiento diferenciado de los distintos actores y capas sociales. La configuración de las principales características de, por un lado, los poderosos y, por otro lado, las clases subordinadas y la ciudadanía indignada, así como la interacción de ambos, está sometida en este proceso a una fuerte pugna cultural por dotarlas de un significado u otro. La comunicación de cada campo, para dotar de sentido propio a la situación, las trayectorias y los objetivos y planes, adquiere mucha relevancia para legitimar o deslegitimar a los distintos actores y estrategias. Pero todo el inmenso poder de las capas dominantes no ha podido evitar la persistencia y la profundidad de la deslegitimación de la mayoría social hacia esas políticas de recortes sociolaborales y sus gestores. Ni ha impedido la reafirmación cívica en los valores democráticos y de justicia social, ni el amplio apoyo ciudadano a la protesta social progresista y sus principales agentes colectivos. Es decir, el desacuerdo de la mayoría popular con la involución socioeconómica y política y su firmeza democrática, igualitaria y emancipadora, han impedido el total sometimiento al poder de las capas subordinadas y desfavorecidas y se ha conformado un campo social diferenciado y crítico.

Todo ese cambio sociopolítico y cultural ha ido influyendo en el campo político-electoral, con una fuerte desafección hacia el partido socialista por la gestión regresiva del último Gobierno de Zapatero y Rubalcaba, manifestada en múltiples encuestas de opinión y constatada ya en los resultados de las elecciones generales de 2011. La evidencia más clara del cambio de escenario político se produce con los resultados de las elecciones europeas, tal como se han analizado antes: Debilitamiento del bipartidismo gobernante (30 puntos); debacle electoral del partido socialista (pérdida de siete millones de votos, dos tercios de los conseguidos en las elecciones generales de 2008 con mayor participación); irrupción del electorado indignado, con la emergencia de Podemos y el ascenso de Izquierda Plural que, sumados a otras fuerzas progresistas y de izquierda nacionalista, llegan a superar la representatividad de la socialdemocracia, acontecimiento nuevo en la historia española. La ampliación y la consolidación de este polo alternativo y el debilitamiento comparativo de la hegemonía del aparato socialista y su continuismo estratégico, supone un reequilibrio

positivo de fuerzas en ese ámbito del centro-izquierda. La existencia de esa corriente social crítica y una mayoría de voto progresista, abre la posibilidad de ganar electoralmente a la derecha y conseguir un cambio político e institucional sustantivo en los próximos procesos electorales.

A pesar de la importante desafección electoral hacia el PP, este partido mantiene una amplia hegemonía institucional e inmensos apoyos económicos y europeos. Pero el elemento más significativo es el agotamiento del bipartidismo como simple alternancia de élites gobernantes, en estos momentos, con similares estrategias socioeconómicas y políticas, y la conformación de una capacidad política alternativa para alcanzar las instituciones, con suficiente representatividad y apoyo ciudadano. Se trata de la oportunidad histórica para implementar una reorientación profunda de la política socioeconómica y la democratización del sistema político y encauzar el conflicto territorial y la construcción de una Europa solidaria. Sin embargo, este desafío a la continuidad del *establishment* y la gestión conservadora de la crisis tiene sus puntos vulnerables. El principal la imprescindible consistencia y unidad del movimiento popular progresista y sus bases de apoyo, la ciudadanía indignada, junto con la capacidad de articulación de una representación política y su convergencia unitaria. En ese sentido, estamos en una fase llena de expectativas pero especialmente difícil.

La conformación de un campo sociopolítico progresista ha durado más de cuatro años, con altibajos en su expresión movilizadora y la combinación del esfuerzo y protagonismo de distintos actores y movimientos sociales, con fórmulas diversas de organización, representación y coordinación. Esa amplia tendencia social crítica que hemos cuantificado en torno a dos tercios de la población ha demostrado su persistencia en torno a dos ejes sociopolíticos básicos: 1) oposición a los recortes sociolaborales y la pérdida de derechos, exigencia de mayor democracia, con deslegitimación de los gobernantes por su actuación regresiva, y 2) legitimación de la protesta social progresista. Auto-ubicados ideológicamente en la izquierda y el centro, estas capas críticas tenían suficiente sensibilidad social y democrática y estaban en desacuerdo con esta gestión de la crisis, regresiva y prepotente, por parte del *establishment* y se han distanciado de él. Una parte enseguida inició una desafección política hacia los gestores directos, primero el gobierno de Zapatero y luego el de Rajoy. Otra parte había compatibilizado su descontento con la política de austeridad y la actuación de las capas gobernantes con el voto al bipartidismo. En las elecciones europeas se ha demostrado que las convicciones sociales y democráticas de esa ciudadanía eran firmes y que la lealtad electoral a esos dos partidos de gobierno era menor.

El resultado, a tenor de las últimas encuestas electorales, ha sido la aceleración del desplazamiento electoral hacia una representación política más acorde con las ideas básicas expresadas por esa corriente social indignada, defendidas por una relevante movilización popular. Se ha ampliado la pérdida de apoyo, primero social y luego electoral, al bipartidismo gobernante, se ha constatado la volatilidad de su voto.

Su influencia política y su impacto en el campo electoral han sido lentos y parciales, pero ha ido cristalizando en un amplio electorado indignado con una representación plural y abierta. En particular, el equipo promotor de Podemos ha

sabido conectar con aspiraciones, demandas e ideas fundamentales de esa ciudadanía crítica. Con una buena capacidad de comunicación con esos sectores sociales ha conseguido la delegación representativa y de liderazgo de una parte significativa de esas capas populares, así como la simpatía de otra parte más amplia de ciudadanía indignada.

Como decíamos, la dificultad mayor empieza ahora: ganar a la derecha y el *establishment*, derrotar a la austeridad, democratizar el sistema político y abrir un periodo progresista de cambio institucional significativo. Ello supone una dura pugna en el plano cultural, ideológico y de legitimación social. Adquiere una importancia decisiva la elaboración de diagnósticos realistas, programas alternativos coherentes y estrategias políticas adecuadas, junto con una gran capacidad argumentativa y comunicativa. Sus ejes centrales y las ideas clave de giro socioeconómico de carácter social y democratización del sistema político se han ido definiendo y son avalados por la mayoría de la población. Sin embargo, hay que dar un paso más en su concreción y debate colectivo. En ese sentido, cobra también mayor relieve la elaboración de los instrumentos teóricos y conceptuales que permitan un mejor conocimiento de la realidad y los recursos y fuerzas disponibles para interpretar y fortalecer el proceso de cambio con un reequilibrio representativo favorable a las fuerzas alternativas. Es un aspecto sobre el que exponemos algunas reflexiones.

6. Alternativa popular frente a la alternancia del bipartidismo

Derrotar la política de austeridad, acabar con la hegemonía institucional de las derechas e impulsar una dinámica de cambio social y político del conjunto de las izquierdas y fuerzas progresistas son desafíos inmediatos para imprimir un giro más equitativo a la política socioeconómica y la democratización de las instituciones políticas. La forma de abordarlo constituye una encrucijada política, en particular, para la dirección socialista.

Encrucijada para la dirección socialista

Tras las elecciones europeas, el año 2015, con la prolongación de las graves consecuencias sociales de la crisis y la deseable persistencia de una corriente social crítica, ofrece un calendario electoral (elecciones municipales y autonómicas en la primavera y, si no se adelantan, elecciones generales en el otoño) donde se pueden plasmar las posibilidades y el alcance de un cambio político e institucional favorable a las izquierdas o fuerzas alternativas. Ya hemos analizado el impacto de los resultados en las elecciones europeas y la oportunidad abierta, en el campo político-electoral de un cambio institucional sustantivo. Se trata de profundizar un camino que facilite un cambio de orientación política hacia una gestión más justa y democrática que asegure una salida equitativa a la actual crisis sistémica. Las dos opciones básicas son: el continuismo, aun con leves modificaciones, de la austeridad y el bloqueo institucional con hegemonía liberal-conservadora, reforzada por la victoria electoral de Merkel y su gobierno de coalición con la socialdemocracia alemana; o el refuerzo de la deslegitimación de la política de ajustes y recortes sociales y sus gestores políticos,

consolidando un campo sociopolítico progresista y alternativo que dé soporte a un giro político e institucional. Es decir, frente a la pretensión continuista de la derecha, se abren dos perspectivas: una simple alternancia bajo la hegemonía del PSOE, o una auténtica alternativa de cambio democrático y socioeconómico.

El desafío corresponde a todos los sectores progresistas, sociales, sindicales y políticos. En particular, por su peso institucional y representativo, afecta especialmente a la dirección del PSOE, tras la confirmación de su continuismo estratégico en su conferencia programática de noviembre de 2013 y la renovación de su cúpula dirigente en el reciente Congreso extraordinario que ha ratificado los ejes centrales de su estrategia política. Su orientación va a influir no solo en su capacidad para incrementar o no la confianza ciudadana en su proyecto y remontar la desafección popular; también va a condicionar la viabilidad de una alternativa de cambio institucional y gubernamental y el carácter de la misma.

Básicamente, y dejando al margen el importante debate sobre el encaje territorial de Cataluña y País vasco, se presentan dos estrategias posibles. Confiar en la *alternancia*, o apostar por una *alternativa de progreso*. Ambas con la confianza en el desgaste electoral del PP. La segunda, apuntada antes, supone una reorientación profunda de las políticas y liderazgos socialistas. La primera, que es actualmente la dominante en la actual dirección socialista, busca recomponer y ampliar sus apoyos electorales con leves cambios programáticos y organizativos; es decir, conseguir ser eje del cambio gubernamental mirando prioritariamente al electorado y a las fuerzas políticas centristas: derechas nacionalistas e, incluso, Ciudadanos, aunque ambas cosas son difíciles de compatibilizar. Ese énfasis en mirar al centro político, típico de la política de Tercera Vía, no ha sido capaz de establecer una vía diferenciada de la derecha y ha demostrado sus límites electorales. No se trata de desconsiderar, al contrario, la necesidad de conformar mayorías sociales y electorales, de centro-izquierda y de izquierda, que son imprescindibles para un cambio gubernamental.

Dificultades para la renovación programática y de liderazgo de la dirección socialista

La cuestión es que esa posición ‘centrada’ va acompañada del discurso de la *responsabilidad*, institucional y no ante sus compromisos sociales, o el *consenso* y el *sentido de Estado*, con las élites económicas y financieras, no con el contrato social con la mayoría ciudadana. Es una estrategia que intenta legitimar el insuficiente distanciamiento con la política económica liberal hegemónica en la UE, esconder el peso de sus vínculos con el poder económico y financiero, renunciar a una gestión progresista y mantener el desdén por la vinculación con los sectores críticos y de izquierda. Infravalora, particularmente en el ámbito estatal, la unidad de las izquierdas y grupos alternativos, esperando su fragmentación y debilitamiento y, en todo caso, su subordinación para un apoyo instrumental a su estrategia. Y son los aspectos a cambiar aunque, evidentemente, generen incertidumbres en sus relaciones con los poderosos y las élites institucionales europeas.

Entre gente progresista es más cómoda la oposición a la derecha; la erosión de su legitimidad es fundamental, y ya se ha iniciado. Pero existen algunas dificultades y

límites a ese proyecto socialista de alternancia institucional. A tenor de las encuestas de opinión, la mayoría de la sociedad todavía no perdona a la cúpula socialista por su anterior gestión gubernamental de la crisis y no se fía tampoco de ella. Persiste una desconfianza masiva en sus líderes y hay falta de credibilidad sobre el alcance de su renovación interna y, sobre todo, estratégica. No hay expectativas de una reorientación y regeneración profunda de su papel de representación, mediación y gestión. Los resultados de las elecciones europeas lo han demostrado, con una debacle de su apoyo electoral. No se trata simplemente de recordar el pasado, sino de destacar la falta de credibilidad de la actual dirección socialista para encabezar una oposición a la austeridad y promover una profunda renovación de su política, sus discursos y sus liderazgos. Se le presentan unos dilemas cuyo desenlace no está claro, pero que, de momento, no garantiza sus objetivos explícitos de recuperar e incrementar la confianza popular en su gestión.

Por tanto, es pertinente tratar las dificultades para la renovación programática y de liderazgo del aparato del PSOE, los dilemas que se abren para su recuperación representativa y electoral y la importancia de un giro de su perfil, más social y democrático. Aparece una paradoja: combinar, por un lado, la construcción unitaria de un bloque social y electoral capaz de derrotar a las derechas y su política de austeridad, y por otro lado, ejercer un sano y equilibrado debate sobre las dificultades y deficiencias existentes, particularmente en la dirección del partido socialista, para intentar superarlas y fortalecer las posibilidades de cambio.

Así, es relevante la orientación del partido socialista (más adelante hablamos de Podemos e Izquierda Plural) en la medida que, por una parte, ha tenido fuertes responsabilidades institucionales y ha abierto un calendario de debate y renovación interna y, por otra parte, mantiene una amplia representatividad entre la ciudadanía, a tener en cuenta para el cambio político e institucional.

En definitiva, se trata de participar en la discusión colectiva sobre qué vías son apropiadas para reorientar la acción política y acabar con la hegemonía institucional de las derechas.

La derrota de la derecha y la estrategia centrada del PSOE

Para desplazar a la derecha del poder institucional sería positiva y necesaria la reorientación estratégica y la renovación profunda del PSOE, cuestión todavía no resuelta, bastante improbable pero no imposible, al menos en alguna medida y en diversos ámbitos locales y autonómicos, al calor del desalojo de la derecha y su acceso al nuevo poder territorial, apoyado por Podemos. Este posible cambio progresista depende del refuerzo de un campo sociopolítico alternativo. El aspecto principal que pueda impulsar su proceso renovador es externo al propio partido socialista, aunque tenga reflejo en parte de sus bases y dirigentes. La desafección electoral, la amplia movilización social y el incremento electoral a su izquierda ya suponen un condicionamiento positivo hacia su transformación. Pero parece que no son suficientes o no hay bastante sensibilidad interna para garantizar un cambio significativo. La cuestión es si se afianzan esas dinámicas, incrementando los riesgos y costes sociales de su continuismo, aunque confían en neutralizarlas o que no se produzcan: la

conformación de nuevas dinámicas sociopolíticas o nuevos sujetos transformadores que desgasten el proyecto de derechas y promuevan también el cambio político e institucional y las perspectivas de ampliación de un espacio social y electoral a su izquierda. La cuestión es que si no se mantiene una fuerte contestación popular que incida en la contienda política, el riesgo para el propio partido socialista es que tampoco se desgaste la derecha y sea insuficiente su controlada, superficial y discontinua oposición parlamentaria.

Esos dos componentes, deslegitimación de la derecha, con la derrota de la austeridad, y ampliación del apoyo social y electoral a las fuerzas alternativas, populares y de izquierdas, deben ser lo suficientemente consistentes y generar una presión sustancial para que la dirección socialista pueda imprimir un giro a su estrategia y a las inercias o intereses corporativos de su aparato. El riesgo de no estimularlo o frenarlo supondría profundizar la tendencia de su declive representativo, su desorientación programática y su alejamiento de la confianza popular. Y de lo que para muchos es más operativo y fundamental: su pérdida o irrelevancia respecto del poder institucional durante un largo periodo.

Estas consecuencias probables deberían ser tenidas en cuenta por su dirección y afectar a su actuación, sin confiar en su simple capacidad comunicativa que, sin cambiar de políticas sustantivas, ya ha demostrado su impotencia para ganar credibilidad ciudadana. Pero también constituirían un alejamiento de las posibilidades de cambio institucional global aunque, al mismo tiempo, se produzcan ascensos electorales de Izquierda Plural, Podemos y otras formaciones progresistas. Incluso podría darse la paradoja de generarse, por un lado, un avance del poder institucional de las fuerzas alternativas y de izquierdas en el ámbito local y autonómico junto, por otro lado, la permanencia de las derechas y la frustración de las bases alternativas y de izquierdas, ante la prioridad socialista, en el ámbito estatal, por las alianzas de centro o el consenso con las derechas que, a su vez, mermara sus apoyos electorales.

Ante la tarea socialista de superar la amplia desafección ciudadana se le plantea un dilema. O continuismo político y organizativo, bajo la referencia del consenso europeo dominante y los acuerdos con la derecha, con su apuesta de una austeridad flexible o complementada con estímulos limitados y las ventajas de una gestión subordinada del poder institucional, en la falsa creencia de poder recuperar una parte de electorado centrista. O bien, una oposición clara y firme que, más allá de la retórica, fortalezca las energías sociales para acabar con la austeridad y la corrupción, democratizar el sistema político y colaborar con el conjunto de fuerzas críticas y de izquierda en una alternativa de gestión progresiva. Y, con ese giro socialista, se amplíe y conforme un horizonte de cambio institucional, hasta desalojar a las derechas. Primero, con ocasión de las elecciones locales en grandes municipios y Comunidades Autónomas, especialmente en lugares donde casi se ha asentado un régimen político implacable como Madrid y la Comunidad Valenciana, o que presenta rasgos particulares muy significativos como el cambio progresista en Navarra. En ese ámbito es más fácil, ya hay experiencias de gobiernos unitarios, y podría constituir un aprendizaje y una transición para el cambio gubernamental estatal, sujeto a más dificultades. Segundo, en las elecciones generales, echando al PP del Gobierno y asegurando una alternativa política transformadora y de izquierdas. Las elecciones

europas, aparte de su dimensión específica para debilitar en la UE las opciones conservadoras, han sido una ocasión para fortalecer esa perspectiva de cambio. Y las recientes elecciones locales y autonómicas han supuesto otro paso significativo.

La primera opción de la dirección socialista parte de su diagnóstico erróneo de que el distanciamiento de gran parte de la sociedad ha sido tanto por su derecha cuanto por su izquierda. No considera que el descontento mayoritario se generó por su gestión antisocial y poco respetuosa con sus compromisos sociales y democráticos. La desafección no se produjo por la derecha y por la izquierda, a partes iguales, respecto de su hipotético ideario de centro izquierda. El posicionamiento mayoritario de las personas desafectas, aún las auto-posicionadas ideológicamente como centristas, estaba a la izquierda de su gestión económica, criticada como antisocial o ineficiente. Reflejaban mayor exigencia democrática ante su poco respeto a sus compromisos sociales o el contrato público con su base electoral. Es decir, aunque una parte de las personas desafectas se consideren ideológicamente de centro (incluso derecha moderada), su actitud crítica se sitúa a la izquierda de la gestión gubernamental anterior (y la actual del PP) y no terminan de fiarse de la retórica socialista de renovación o de nuevas ofertas o guiños sociales poco creíbles, y muchas de ellas han apostado por fuerzas alternativas.

La opción continuista de los líderes socialistas, aun con leves modificaciones, está dependiente, sobre todo, de sus relaciones con los poderes económicos e institucionales, estatales y europeos; es la dominante en la socialdemocracia europea, particularmente la alemana, ahora, la francesa y, parece que después, la italiana. Sin embargo, su dificultad adicional es que, especialmente en estos momentos de crisis y conflicto social, no resuelve la tarea del ensanchamiento de sus bases sociales, con una mayor unidad y activación del campo progresista en torno a un nuevo proyecto social, democrático y europeo. Por tanto, no les garantiza el ascenso de la confianza ciudadana. La estrategia no es funcional con los objetivos explícitos de su recuperación electoral e institucional. No apuesta por un significativo cambio político-institucional con la fuerza social suficiente para implementar un programa de progreso que ilusione a la mayoría de la sociedad y, especialmente, de los jóvenes.

La segunda opción, tímidamente señalada por socialistas franceses críticos, y apenas apuntada por algunos de sus componentes (por ejemplo, el candidato a las primarias Pérez Tapias, de Izquierda Socialista), tiene sus riesgos pero, sobre todo, les ofrecería nuevas oportunidades. La principal objeción oficial por la que se desecha es que solo podría conseguir apoyos minoritarios, ofreciendo el electorado centrista a manos de las derechas. Es un diagnóstico interesado e irreal, cuando está demostrado, por múltiples encuestas de opinión, que la mayoría de la sociedad, en muchos casos en torno a dos tercios, se opone a los recortes sociolaborales, defiende el empleo decente, los derechos sociales y los servicios públicos, exige más democracia y acción eficaz contra la corrupción, y está de acuerdo con las protestas sociales progresistas. Desde luego, supondría un giro programático y de actuación política y organizativa hacia la izquierda y las demandas populares respecto de su gestión anterior y profundizar su talante democrático. Pero eso no dejaría de ser coherente con sus referencias de centroizquierda y no le alejaría de la mayoría de gente progresista, sino que reforzaría sus vínculos con la mayoría de la sociedad. Dicho de otro modo, para

aplicar una estrategia de centro-izquierda, más social y democrática, capaz de representar las opiniones progresistas de centro e integrar compromisos sociales con electorados de izquierda, la dirección socialista debe girar a la izquierda de su gestión gubernamental anterior, particularmente su política socioeconómica y laboral, percibida por amplios sectores como de derechas, y apostar por una profunda regeneración democrática del sistema político y una reorientación de su estrategia social y económica. Esa apuesta, siempre que fuese seria y consiguiese suficiente credibilidad popular, es la más sólida para reencontrarse con su propia base social y electoral, ampliar sus apoyos y converger con las fuerzas alternativas.

Sin embargo, todo indica que el 'nuevo' PSOE ha decidido continuar con la 'vieja política' y que aspira, sin mucha convicción ni posibilidades, a ser el eje de la alternancia. Su voluntad manifiesta es conseguir la hegemonía electoral con esa autoafirmación propia y diferenciada tanto de la derecha como de su izquierda. Su renovación, aparte de nuevas caras, volvería a ser, sobre todo, comunicativa, con un programa difuso o ambiguo que le permita construir esa imagen 'centrada'. Es una posición que, ante la probable y cruda realidad de una mayoría relativa del PP frente a ellos y un ascenso significativo de las fuerzas alternativas a su izquierda les llevará al dilema estratégico de su proyecto. Pero habiendo renunciado a una política sustancial de cambio, la ausencia de una fuerte remontada electoral les puede dejar en una posición subordinada que les conduzca, en aras de la gobernabilidad, al pacto con la derecha. La ambigüedad programática persigue ese ascenso representativo pero, sobre todo, deja las manos libres a la dirección socialista para decidir, tras comprobar los resultados electorales, sus alianzas. Luego volvemos sobre ello a la luz de los resultados de diversas encuestas electorales y los resultados de las elecciones locales y autonómicas.

En conclusión, no está clara la resolución de los dilemas de la dirección socialista en un sentido que asegure un cambio institucional de progreso e, incluso, que su nueva orientación les permita una renovación y ampliación de sus bases sociales y electorales. Sería una circunstancia dañina para el propio partido socialista, cada vez menos legitimado socialmente y más dependiente del poder económico e institucional. En estas circunstancias éste le necesitaría menos y, por tanto, le concedería menos poder y ventajas institucionales. Pero, sobre todo, sería mucho más perjudicial para el conjunto de las fuerzas alternativas y las expectativas de cambio institucional cualitativo a medio plazo, aunque se viesen fortalecidas en su representatividad. Implica la necesidad de un debate colectivo ante la posibilidad real de poder echar a la derecha y abrir un periodo más democrático y progresivo. Y valorar en qué medida es capaz la dirección socialista de corregir su rumbo y cómo afecta al reequilibrio de las distintas formaciones políticas.

7. Carácter y orientación del PSOE: su dilema estratégico

Uno de los problemas más significativos para analizar las perspectivas de este proceso político es el tipo de estrategia de la dirección socialista y, en particular, sus compromisos y su estrategia respecto de la gobernabilidad y la garantía de hegemonía institucional de ese bloque de los poderosos. Ello les genera dependencia para

continuar la política anterior, socialmente regresiva: una orientación socioeconómica liberal, con pequeños matices respecto de la austeridad dominante en la UE, y una imbricación con el poder institucional que le impide abordar una significativa democratización del sistema político.

Ya en la literatura sociológica clásica se han analizado las tendencias corporativas de las élites políticas y los grandes aparatos partidistas (Michels, 2003; Wright Mills, 1957), explicando la contradicción existente entre la élite del poder y la democracia social y política. La cúpula dirigente del PSOE, como partido de gobierno, manteniendo lo fundamental del orden neoliberal existente y con una larga trayectoria de gestión del poder institucional, tiene gran capacidad para la distribución de recursos y cargos institucionales, de gestión y representación en los distintos ámbitos locales, autonómicos y estatales. Y también de influencia en la gestión de las prioridades presupuestarias y la regulación de la actividad económica y social. Su aparato dirigente es determinante en la decisión partidista de sus estrategias globales y su configuración interna. Sus intereses y preferencias son decisivos, aunque la mayoría de sus afiliados se considere de izquierdas, y muchos mantengan vínculos estrechos con sindicatos, movimientos sociales y grupos progresistas.

Su caracterización es fundamental para determinar los mecanismos que condicionan su estrategia real, más allá de su discurso o su retórica más o menos difusa y ambivalente. No se trata de explicar su pasado y cómo y por qué han adoptado esa gestión regresiva, desde el punto de vista social y democrático. Ya hemos hecho alusión a ello. Ahora lo señalamos para explicar los condicionantes para su política futura, en particular, ante la oportunidad de fuerte cambio político, con gran impacto institucional, económico y europeo. Se trata de delimitar cuál es el peso de sus compromisos con el poder, hasta dónde llega su renovación interna y si le permite aparecer como una fuerza política con un 'proyecto de izquierda que atrae al centro'.

La mayoría de ese partido, de sus bases afiliadas, se autodefine de izquierda, y al menos la mitad de sus votantes también. Su estructura intermedia, varias decenas de miles de cargos políticos, es más ambivalente. Está condicionada por sus responsabilidades institucionales menores, su necesidad de legitimación interna y con sus electores y su dependencia de los aparatos partidistas, estatales y autonómicos. Su pasado histórico también ha tenido un carácter doble, incluso en el más reciente de la primera legislatura de Zapatero, con varios rasgos progresistas. La posición del PSOE no necesariamente ha de ser fija, para siempre y sin ambivalencias. Caben otros componentes progresistas derivados de la necesidad de su legitimación ante sus bases sociales, incluso la posibilidad remota de una transformación sustantiva, hoy día improbable pero que dejamos abierta.

Hablamos, especialmente, del aparato o la cúpula del PSOE, en esa etapa histórica, responsable y gestor reciente de la política gubernamental de austeridad, recortes sociales e involución democrática, sin una rectificación sustantiva o un nuevo proyecto programático de izquierdas o, como mínimo, de centro-izquierda y progresista. En ese sentido, hemos comentado que su gestión principal ha sido de derechas, similar a la estrategia liberal-conservadora dominante en la UE. Ha sido fiel a los compromisos con los intereses del poder oligárquico, financiero e institucional. Su intento de legitimación ha sido mediante su justificación por su sentido de Estado y de

‘responsabilidad’... con la estrategia liberal-conservadora, desigual y con déficit democrático, para afrontar la crisis sistémica. Y ha fracasado. Han pesado más sus lazos con el poder que sus compromisos sociales y democráticos con la mayoría de la sociedad. Su pertenencia al *establishment*, en este proceso, ha sido clara. Y no tiene credibilidad su pretensión de eludir sus responsabilidades echando balones fuera con el ‘no podía hacer otra cosa’.

Tras las elecciones generales pasó a la oposición y ha disminuido su responsabilidad en la gestión política. Pero todo el proceso posterior, incluida la renovación generacional con la reafirmación del continuismo programático y estratégico, no le permite al ‘nuevo’ aparato, primero con Rubalcaba y después con Sánchez, tener suficiente credibilidad para recobrar una identidad de izquierdas. La solución ofrecida a sus militantes, deseosos de remontar la debacle electoral y mantener ciertas cotas de poder institucional, municipal y autonómico, sigue siendo la política comunicativa: hacer olvidar su gestión gubernamental antisocial y sus vínculos con el poder, construir una retórica de apariencia progresista y confiar que una parte de la base desafecta del PP les vote a ellos. Las pérdidas por su izquierda las recuperarían por su derecha. Pero es dudoso el impacto renovador de la combinación de caras nuevas y vieja política, aunque puede frenar su deterioro y beneficiarse parcialmente del fuerte desgaste del Gobierno conservador. Se obvia una autocrítica y rectificación a fondo, como ya le reclamaba gran parte de su electorado en el año 2010, tras su frustración por su giro antisocial.

No obstante, esa relativa ambigüedad, posible en su actual situación en la oposición parlamentaria y ante la prepotencia del PP, no resuelve su crisis de legitimidad social ante la falta de confianza de amplios sectores de la ciudadanía y sus sectores desafectos, aunque quizá frene el proceso de descenso del apoyo electoral de la base social que conserva. Su dilema sigue siendo que el hilo conductor de su política se someta al imperativo de sus vínculos con el poder y no de la mayoría de la ciudadanía. La esperanza de hacer las dos cosas a la vez, como en otras épocas u otras circunstancias, tiene poco recorrido en la actualidad. Las presiones de las dos partes, hoy, son difícilmente conciliables: representar el realismo que define el poder, ponerse a su servicio y seguir colaborando con la gestión del continuismo, o buscar la legitimación de la mayoría ciudadana, apostando por un auténtico cambio.

Además, siguen dependientes del consenso europeo, entre conservadores y socialdemócratas, en torno a la estrategia de austeridad flexible, pendiente de más recortes, particularmente en Francia e Italia, y especialmente perjudicial para el sur. Es decir, los actuales dirigentes socialdemócratas europeos, particularmente, con responsabilidades gubernamentales, siguen siendo corresponsables de las políticas de ajustes regresivos, dentro del consenso europeo y alemán (incluido el SPD) con el bloque dominante de la derecha. Francia, como demuestra el nuevo Gobierno de Hollande-Valls, se despidió de la posibilidad de una estrategia diferenciada de la austeridad dominante en la UE, impulsando su fuerte ajuste regresivo (la editorial del diario *El País* -27/8/2014- defiende con entusiasmo ese nuevo giro y llega a acusar de ‘populistas’ a los ministros disidentes por criticar la ‘austeridad ineficaz e injusta’). Queda Italia, cuyo líder del PD, el demócrata-cristiano M. Renzi, referencia de P. Sánchez, comparte la orientación dominante por la ‘austeridad flexible’ y busca una

imagen diferenciada. Pero ya está empezando a ejecutar los planes más antisociales del imperativo liberal-conservador para los países del sur: 'reformas estructurales' sin crecimiento sustancial y prioridad al déficit y la deuda pública, frente a la exigencia de empleo decente y los derechos sociolaborales, que es el nudo a deshacer; su reforma laboral, facilitando el despido e incrementando la precariedad, ha sido fuertemente contestada por el sindicalismo y los sectores críticos.

La opinión pública española, mayoritariamente, ha estado en contra de los recortes sociales y laborales del Gobierno de Zapatero y Rubalcaba y ha criticado los incumplimientos de su contrato social y democrático con sus bases sociales y el conjunto de la ciudadanía. El periodo de oposición con Rubalcaba, siguiente Secretario General, no ha sido capaz de alejar esa exigencia popular de responsabilidades y superar la desconfianza en sus líderes. El actual equipo dirigente, con su renovación generacional y evitando a los gestores directos de aquella política, pretende que se olvide esa crítica y trata de recuperar la confianza de parte significativa de su anterior base desafecta. Pero, sin una autocrítica valiente y una reorientación estratégica, el cierto aire democrático que le ha conferido las primarias con la participación de sus militantes en la elección del nuevo Secretario General, puede ser insuficiente, más cuando solo consiguió la mitad de los votos emitidos. Además, el propio Pedro Sánchez solo se encarga de remarcar su vocación de Gobierno con similar estrategia, el respeto al consenso europeo con la derecha, la garantía de los pactos de Estado con el PP, o el aseguramiento de la estabilidad institucional. Todo ello frente a las demandas de profunda regeneración democrática y cambio socioeconómico y político de los movimientos sociales y fuerzas políticas que han surgido a su izquierda, e incluso a las propuestas de una parte significativa de su militancia representada por Pérez Tapia, de Izquierda Socialista.

La última gestión gubernamental socialista ha sido, fundamentalmente, de derechas, ha demostrado sus vínculos con el poder oligárquico y su incumplimiento de sus compromisos sociales y democráticos. El PP y el PSOE no son iguales, especialmente si hablamos de 'todo' el partido, todas sus actividades de base o su papel histórico. Pero, su estrategia y su gestión gubernamental, socioeconómica y política, en este periodo de crisis, ha sido similar. La diferencia más significativa, si hablamos del conjunto y no de su aparato, es que sus militantes y sus bases sociales y electorales son muy diferentes. En el PSOE la distancia entre las posiciones progresistas y la identificación de izquierdas de la mayoría de sus votantes y la gestión regresiva e impopular de su cúpula es mucho mayor. La dirección, para recomponer su credibilidad ante sus bases, acude ahora a la retórica de que el 'Partido es de izquierdas y busca el voto de centro'. Su desplazamiento estratégico hacia la derecha también ha afectado al distanciamiento con su base electoral y la amplia desafección, sobre todo por la izquierda, en las elecciones generales de 2011 y posteriormente. Ahora –Barómetro del CIS de julio de 2014– la composición de su potencial electorado ha variado: solo la mitad se auto-ubica en la izquierda (39,7%); en el centro se sitúan el 31,9% y en la derecha el 9,6% (del resto no hay datos).

No obstante, esa declaración retórica queda lejos de la experiencia de su política y su fundamentación. Fueron la *Tercera Vía*, del laborista británico Blair, y el *Nuevo Centro*, del socialdemócrata alemán Schroeder, quienes decretaron la

superación y el abandono de la izquierda socialdemócrata (Giddens, 1999). Su giro, desde primeros de los años noventa, era hacia el centro, en una supuesta sociedad de clases medias, sin fuerzas políticas y sociales a su izquierda, con una gestión neoliberal de la economía y el mercado de trabajo y una reestructuración regresiva del Estado de bienestar. Aparte de su carácter antisocial e injusto, el proyecto falló por lo más relevante para las nuevas cúpulas dirigentes de la socialdemocracia europea: la pérdida de apoyo social y, sobre todo, su desplazamiento del poder político y, en esa medida, su irrelevancia para el poder económico.

La reconversión ideológica y política de los partidos socialistas europeos ha sido profunda. Ante el emplazamiento de la crisis socioeconómica e institucional, sus aparatos gubernamentales optaron por los intereses del poder económico-financiero, sufriendo una fuerte desafección popular. En época de bonanza económica esa política de centro o social-liberal, todavía era practicable y mantenía cierta credibilidad. En esta etapa de crisis la situación se ha polarizado abiertamente por la gestión liberal-conservadora. Estamos ante una profunda crisis de identidad y, particularmente, de representatividad de las cúpulas partidistas de la socialdemocracia (Ramoneda, 2012). En este tiempo sus aparatos dirigentes han acumulado todo el poder interno, utilizan los resortes institucionales que les quedan (y que quieren tener) y no se dejan influir por las demandas de sus militantes y sus bases sociales, a pesar de gestos como las primarias internas para elegir al secretario general... que asegure mejor la vuelta al poder institucional. Son un aparato de acceso y gestión del poder institucional. Los condicionantes más significativos para su proyecto vienen derivados de las posibilidades de obtención de suficiente representatividad electoral que les permita mayor o menor capacidad de gestión de ese poder y sus ventajas adicionales.

8. Reequilibrios electorales: Oportunidad para el cambio político

Las distintas encuestas de opinión electoral realizadas posteriormente a las elecciones europeas (particularmente las del CIS, julio y octubre de 2014 y enero de 2015, y *Metroscopia*, de julio de ese año a febrero de 2015) ofrecen unos resultados y, sobre todo, unas interpretaciones muy contradictorias de sus consecuencias y los escenarios abiertos. Especialmente, se trata de valorar dos aspectos: 1) el alcance del reequilibrio entre el partido socialista y las fuerzas alternativas a su izquierda o democráticas y populares; 2) las posibilidades y características de un cambio gubernamental, así como en las principales ciudades y las Comunidades Autónomas más significativas, para abrir un ciclo político-institucional progresista y transformador. Junto con el análisis, antes expuesto, de la recomposición del mapa político derivada de los resultados de las elecciones europeas, nos servirán para exponer las hipótesis de los escenarios probables, el grado de adecuación de los planes de los distintos partidos políticos, las alianzas posibles y el significado y la finalidad de sus discursos.

Según la primera encuesta del CIS, el apoyo electoral al PP desciende pero conserva el 30%, casi quince puntos menos que en las elecciones generales del año 2011 -44,6%-, aunque con casi nueve puntos de diferencia respecto del 21,2% del PSOE, que sigue descendiendo -28,7%-. Podemos tiene un gran incremento hasta el 15,3%, que sumados al 8,2% de los de Izquierda Plural (IU, ICV, Anova, Batzarre...), que

queda por debajo, y el 1,4% de los grupos de Primavera Verde (Compromís, Equo, Chunta aragonesista), llegan a prácticamente el 25%. Es decir, más que el partido socialista y por encima de lo conseguido en las elecciones europeas (casi el 20%). Sumados los votos de ese polo alternativo superan (según la estimación del CIS) el voto al PSOE y también sus resultados en las europeas (23%). Dejamos al margen a la izquierda nacionalista (ERC, que asciende, Amaiur-Bildu y BNG), a la derecha nacionalista (CIU que desciende, PNV y CC), y a UPyD y Ciudadanos, aunque todos ellos pueden participar en posibles combinaciones y alianzas para una alternativa de gobierno, particularmente, en el ámbito local y autonómico.

La encuesta de julio de *Metroscopia* (no publicada, a diferencia de lo habitual, por el diario *El País*) apuntaba más a estos datos del CIS, pero la de agosto facilita unos resultados completamente diferentes que merece la pena contrastar con los del CIS. El PP llegaría al 32,3%, ligeramente por encima de los datos del CIS, pero confirmando su fuerte descenso de más de doce puntos respecto de las elecciones generales. La diferencia más significativa es la estimación del resultado electoral para el PSOE que, en este caso, se situaría en el 31,7%, prácticamente empatado con el PP y diez puntos por encima de los del CIS, con una recuperación sustantiva (más de ocho puntos, un tercio más) en relación a sus resultados en las elecciones europeas, que sus portavoces achacan a los efectos de la renovación de su dirección. En el otro polo, Podemos se quedaría en el 10,7%, subiendo respecto de las europeas pero menos que con el sondeo del CIS, e IU/ICV (así lo contabilizan) el 4,9%; entre ambos, con una distancia significativa del primero respecto del segundo, sumarían el 15,6% y junto con las formaciones de Primavera Verde, de mantenerse su voto podrían llegar al 17%, muy distantes de la representación del PSOE (el resto de votos, salvo UPyD que desciende al 3,3%, no están desagregados).

Por tanto, esta encuesta señala un doble fenómeno muy favorable para el PSOE: empate con el PP, con posibilidad de tener mayoría relativa, y hegemonía completa respecto al resto de fuerzas a su izquierda (o de centro). Esa lectura es muy adecuada para su plan de alternancia autónoma del PP y poder aspirar a dirigir el Gobierno con el apoyo de otras fuerzas en situación subordinada, sin contemplar acuerdos con las fuerzas alternativas y reservándose sus posibles alianzas con el centro –UPyD/Ciudadanos- y/o la derecha nacionalista. Es el escenario conocido en los últimos gobiernos de Felipe González y los de José Luis Rodríguez Zapatero. Todo ello avalaría el actual proyecto de la cúpula socialista de continuismo programático y vocación de gobierno, con una orientación económica liberal y respetando sus compromisos con el poder económico, institucional y europeo. Solo con un cambio de caras, no implicadas directamente en la gestión gubernamental anterior, y de retórica, ahora algo progresista, sería suficiente para volver al Gobierno. Refuerza su posición oficial de desconsiderar una reorientación de la política socioeconómica y una profundización en la regeneración democrática del sistema político. Renuncia a un cambio sustantivo y unos acuerdos con las fuerzas alternativas. Incluso en el ámbito local y algunas autonomías, sin tantas implicaciones con la responsabilidad de Estado, sus estrategias socioeconómicas y políticas y los consensos europeos, podrían permitirse negociar apoyos con esas fuerzas críticas a su izquierda situadas en una

posición de inferioridad, siempre que no cuestionen su hegemonía institucional y el grueso de sus políticas estatales y europeas.

Sin embargo, esa hipótesis puede no ser muy realista. Las dos encuestas del CIS, que favorecen los planes del PP, expresan otro escenario: continuidad de un Gobierno del PP, aunque sin mayoría absoluta, y una recomposición del resto de fuerzas con dos posibles polos relevantes de oposición: PSOE y Podemos-Izquierda Plural..., de más del 20% cada uno y, si hay cierta convergencia, superior los segundos al primero.

Las encuestas demoscópicas, promovidas por distintos medios y con distintos sesgos, van a estar en el orden del día hasta las elecciones generales para intentar conocer las tendencias electorales y para que cada actor pueda adecuar su estrategia política y comunicativa en función de sus intereses. Podemos citar otros dos sondeos de periódicos liberal-conservadores y varias de medios progresistas.

El diario *El Mundo* (30 de agosto de 2014), publica una encuesta de *Sigma-Dos*: PP: 30,1%; PSOE: 22,3%; *Podemos*: 21,2%; IU: 4,1%; UPyD: 5,6%. Destaca la diferencia de más de ocho puntos de ventaja del PP respecto del PSOE, el fuerte ascenso de Podemos que se acerca al PSOE y su gran ventaja respecto de IU (no aparece como Izquierda Plural), aunque sumados sus votos con los de Podemos, superan al PSOE.

El diario *La Razón* (1 de septiembre de 2014) expone los resultados de otra encuesta, realizada por *NC-Report*, que explicita también la adjudicación de escaños (entre paréntesis) con un nivel de participación del 61,3%: PP: 33,9% (132/138); PSOE: 23,4% (89/93); Podemos: 15,0% (56/60); IU: 5,6% (9/13); UPyD-Ciudadanos: 7% (11/16); derecha nacionalista (CIU-PNV-CC): 5,1% (16/18); izquierda nacionalista (ERC-AMAIUR-BNG): 4% (15/18); Compromís: 0,2% (2); G-Bai: 0,2% (1); FAC : 0,3% (1). Como se ve, existen diferencias, particularmente, con la de *Metroscopia* y son más cercanas a las del CIS, ahora teniendo en cuenta la renovación de la dirección socialista que apenas tendría un impacto significativo. Así, el PP, aún con un fuerte descenso, tendría mayoría relativa con un suelo superior al 30%. El PSOE no termina de llegar al 25%. Y Podemos obtiene un fuerte crecimiento que, sumado con el de IU (y el resto de Izquierda Plural y Primavera Verde-Compromís...), le sigue situando en un nivel similar al PSOE. Y otro dato de interés es que sumado el electorado de centro derecha, 46,3% (160-173) resulta inferior al de centroizquierda, 48% (171-186) –dejando sin adjudicar a G-Bai-. Respecto de la distribución de escaños es de resaltar la gran diferencia de adjudicación al PSOE con su 23,4% y el resto alternativo que se vería penalizado de ir por separado. Si fueran juntos Podemos-Izquierda Plural-Compromís..., podrían llegar al mismo número de diputados que el PSOE (cerca de 90) y lo que es también significativo, se reducirían los del resto de partidos y, por tanto, habría una mayor desventaja para las derechas que no tienen potencialidad para su ampliación.

La encuesta sobre las tendencias electorales de otoño, publicada en la revista *Temas (Dossier 24, noviembre de 2014)*, da otros resultados en intención directa de voto, con una diferencia significativa a favor del partido socialista: PSOE, 31,4%, Podemos, 24,6%, PP, 21,3%, e IU, 8,9%. Aunque reconoce la existencia de un voto oculto conservador. Otros datos complementarios de interés son la edad media del potencial electorado a los partidos de centroizquierda y alternativos: PSOE, 53,3 años; Podemos, 42,9, e IU, 45,6 (la media está en torno a 49 años). La cuarta parte del electorado socialista (24,7%) tendría más de 60

años (1,8 millones), y el 21% del de Podemos sería joven entre 18 y 29 años (1,2 millones). Por otra parte, existe una desigual preocupación por la política. Con *mucho o bastante interés por la política* las respuestas son: PSOE, 19,5%; Podemos, 40,9%, e IU, 42,2%. Quedan rebatidas las interpretaciones de que la ciudadanía activa más crítica era un movimiento anti-político y se demuestra que el electorado indignado, los votantes de Podemos e IU, tiene una mayor conciencia cívica por los asuntos públicos y superior interés por la política respecto del votante socialista. Otro indicador significativo es el amplio porcentaje, entre esos electorados, de los *Partidarios de la intervención del Estado en la economía*: PSOE, 57,4%; Podemos, 67,5%, e IU, 61,1%. Es decir, más del 60% del electorado de centro-izquierda e izquierda, algo menor entre los votantes del PSOE, apuestan por la intervención estatal en la economía, la tradición keynesiana o socialdemócrata clásica, frente a la ideología liberal o social liberal de un mercado sin apenas o con poca regulación pública.

El sondeo de *Metroscopia* (*El País*, 5 de octubre de 2014) con datos que corresponden al 72,2% de la ciudadanía (un poco por encima de la participación en las elecciones generales de 2011: 71,7%) ofrece la siguiente intención de voto y simpatía (en porcentaje no sobre el censo como informa ese periódico sino sobre el total del voto probable declarado, según elaboración propia): PP, 22%; PSOE, 28,9%; Podemos, 19,8%; IU, 8,6%, UPyD, 5,5%; otros partidos más voto en blanco, 15,3%. Como se ve, el partido socialista sería ganador (con parecido porcentaje que en 2011: 28,3%) aunque con unos votos similares a la suma de Podemos, que sigue ascendiendo, e IU (que superarían al PSOE si se añade el resto de Izquierda Plural y Compromís, Equo y Chunta aragonesa...), pero a distancia significativa del PP que baja de forma muy contundente (pierde la mitad de sus votos de 2011).

La posterior encuesta de *Metroscopia* de estimación de resultado electoral (voto+simpatía) sobre el voto válido (70,5% del censo, o 29,5% de abstención) (*El País*, 2 de noviembre de 2014), señala algunas variaciones significativas: desplome del PP (20,7%), descenso de PSOE (26,2%) e IU/ICV (3,8%) y reforzamiento de Podemos (27,7%), que pasa a ocupar la primera plaza; mientras UPyD se mantiene en un escaso 3,4%.

El siguiente sondeo de *Metroscopia* (*El País*, 7 de diciembre de 2014), con similares criterios interpretativos y una abstención del 27%, ofrece algunas pequeñas variaciones respecto de la de noviembre: El PSOE obtiene una estimación de voto del 27,7% (sube 1,5 puntos); Podemos el 25% (baja 2,7 puntos) y PP el 20% (baja siete décimas). Por otra parte, IU/ICV alcanza el 5,6% (sube 1,8 puntos) y UPyD el 4,8% (aumenta 1,4 puntos). Por otro lado, en la intención directa de voto los resultados son los siguientes: Podemos, 18,1%, PSOE, 16,5%; PP, 12,1%; IU/IC, 4,1%, y UPyD, 3,5%. Además, aparecen tres tipos de indicadores de interés. A la pregunta *Las propuestas que está haciendo son realistas y con posibilidades de llevarse a cabo*, responden SI (entre paréntesis el porcentaje de NO): Podemos, el 30% (62); PP, el 28% (65), y PSOE, el 4% (55). A la pregunta *Tiene ideas claras sobre lo que hay que hacer para superar la crisis económica*, las respuestas afirmativas son: Podemos, 37% (57); PP, 27% (68), y PSOE, 26% (67). Y a la cuestión *Tal como están ahora los partidos políticos, es el único en que se puede confiar* responden positivamente a: Podemos, 22% (74); PP, 12% (86), y PSOE, 12 (83).

El posterior estudio demoscópico de *Metroscopia* (*El País*, 11-1-2015) confirma el diagnóstico de las tendencias principales de la estimación de voto válido (con una

abstención del 28,4% y un margen de error de 3,2 puntos): consolidación de Podemos (28,2%), continuación del declive del bipartidismo, con un pronunciado descenso del PP (19,2%) y una recaída del PSOE (23,5%), después de haberse recuperado parcialmente en las encuestas de agosto y octubre. Esto supone que las expectativas de remontada del partido socialista derivadas del cambio de su nuevo equipo dirigente se frustran y su electorado potencial sigue descendiendo respecto del de las elecciones generales. Al mismo tiempo, IU/ICV se sigue manteniendo una influencia limitada (5,3%), al igual que UPyD (5%), mientras tanto se amplía el apoyo a Ciudadanos (8,1%). Otro dato de interés es la procedencia del potencial votante de Podemos (en %): del PSOE: 27; IU: 16; se abstuvo: 15; otros/blanco: 13; no tenía edad: 8; PP: 7; UPyD: 6. Además, preguntados esos potenciales votantes de Podemos por los motivos principales para votarle, manifiestan: *Por la corrupción existente* (92%); *para acabar con el bipartidismo del PP y del PSOE* (86%), y *porque Podemos es la única alternativa real para resolver los problemas de España* (61%).

Estos datos señalan que, frente a todas las interpretaciones sesgadas sobre el carácter irreal y difuso del proyecto de Podemos o respecto al realismo y la posibilidad de sus propuestas, la claridad de las ideas para salir de la crisis y la credibilidad o confianza en su representación política, este partido aparece entre la opinión pública en primer lugar e, incluso, en relación con el primer y tercer aspecto casi igual que la suma de PP y PSOE, es decir, del bipartidismo; por el contrario, PP y PSOE tienen un porcentaje superior al de Podemos en el grado de desconfianza y la falta de ideas claras para superar la crisis.

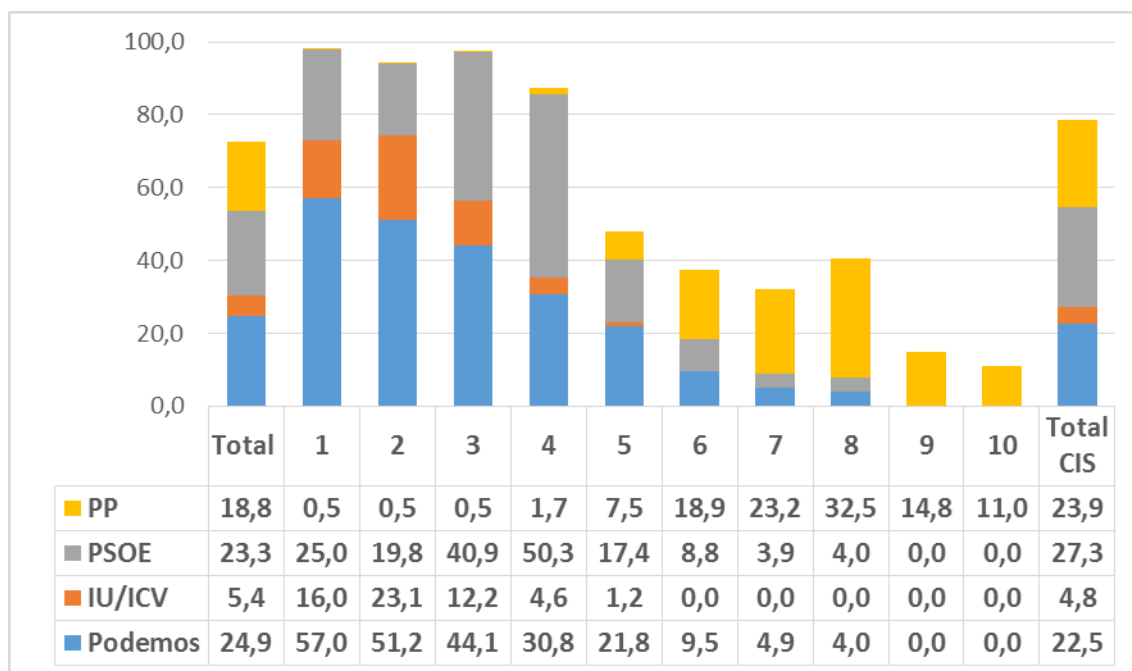
Respecto de *Qué partido tiene un programa más realista y con posibilidades de llevarse a cabo para lograr que España supere la crisis económica* las respuestas son (entre paréntesis los datos de los potenciales votantes a cada partido): PP, 15% (73); PSOE, 13% (48); Podemos 12% (49); IU, 3% (37), y UPyD, 2% (31); la mayoría dice que ninguno (35%) o NS/NC (17%). Es de destacar el grado de apoyo desigual que tiene el programa de cada partido entre sus potenciales votantes, y la confianza que todavía suscita el del PP entre su electorado.

Por último, *Metroscopia* en su Barómetro de febrero (*El País*, 8-2-2015), en su estimación de resultado electoral sobre voto válido, confirma la primera posición de Podemos (27,7%), que se mantiene en un nivel similar desde noviembre anterior, y el segundo lugar el PP (20,9%), igualmente en el mismo rango desde esa fecha. Lo más llamativo es el descenso continuado del PSOE (18,3%) casi cinco puntos menos desde enero (23,5%) y doce puntos menos que en octubre (30,9%); lo que significa el fracaso de las expectativas de remontada electoral derivada de la renovación del nuevo equipo dirigente, con Pedro Sánchez. La tensión interna crece al cerrarse más la posibilidad de ganar las elecciones al PP pero, sobre todo, por verse abocado a apoyarlo ante el ascenso de Podemos, dinámica adaptativa problemática pero que ya ha comenzado frente a la otra posibilidad negada firmemente de buscar un acercamiento con ellos para explorar un gobierno alternativo de progreso. Por otra parte, se nota un ligero ascenso de IU/ICV (6,5%) y un pronunciado incremento de Ciudadanos (12,2%).

Hay que añadir que el margen de error de estos estudios demoscópicos de *Metroscopia* es de 3,2 puntos (de más o de menos), por lo que variaciones de menor porcentaje a ese no son suficientemente relevantes para tener una certeza absoluta sobre la opinión electoral en estos momentos, aparte de que esté sometida al impacto de las posibles variaciones políticas y económicas hasta las elecciones generales.

Por último, nos detenemos en el Barómetro de octubre de 2014 del CIS (publicado el 5 de noviembre) aporta otros resultados (gráfico, 1), algo diferentes a los de *Metroscopia* y su anterior estudio de julio, antes comentado. Además, nos ofrece datos sobre las opciones ideológicas de la población y su conexión con sus preferencias electorales.

Gráfico 1: Distribución de voto+simpatía según segmento ideológico²



Fuente: CIS-Barómetro de octubre de 2014 y elaboración propia. Eje izquierda (1) a derecha (10).

La suma de Podemos (24,9%) e IU/ICV (5,4%) llega al 30,3% y supera al PP (18,8%) y al PSOE (23,3%). Esa distancia aumentaría si sumásemos a los primeros lo recibido por el resto de Izquierda Plural y por Compromís-Equo (1,1%). No obstante, el polo alternativo todavía queda lejos para que pueda alcanzar la hegemonía institucional. En el caso de un acuerdo PP-PSOE, el bipartidismo todavía sería mayoritario. Además, hay que considerar que el resto de partidos no detallados suma 21,5 puntos, repartidos entre la derecha nacionalista (CIU, PNV, CC) o regionalista (UPN, FAC), el centro (UPyD/Ciudadanos) y la izquierda nacionalista (ERC, Amaiur, BNG) y la singular Geroa Bai. En todo caso, es de destacar que las referencias ideológicas de este heterogéneo conglomerado tienen un mayor peso demográfico en los segmentos de centro-derecha y derecha moderada (6, 7 y 8).

² Estos resultados son sobre el voto+simpatía definidos, es decir, sin contar con el 22,4% de personas encuestadas que dicen que no van a votar a ninguno de los partidos, por lo que en ese momento se abstienen. La distribución es vertical y el resto hasta el 100% corresponde a otros partidos. Cada segmento, como se ha explicado en una nota anterior, tiene distinta población: los centrales son mayores y los extremos menores. Por otro lado, existe un 4,4% que definen su voto o simpatía pero no se auto-ubican en ningún segmento ideológico. El total de esta elaboración propia se pone en la primera columna, para contrastar con el total que propone el CIS, después de su 'cocina electoral'.

Una parte de la desafección electoral y la abstención, sigue siendo un síntoma de crítica justa a las políticas gobernantes, pero su base social e ideológica cambia respecto de las elecciones generales de 2011. Existe un alto desapego del electorado de centro derecha y derecha hacia el PP, que sufre un fuerte distanciamiento de gran parte de su base ideológica, incluida la de derecha extrema. En las elecciones generales pasadas la desafección política y electoral se produjo, sobre todo, entre sectores críticos por la izquierda (auto-ubicados en la izquierda y el centro progresista) respecto de la gestión del PSOE, con cierta orfandad representativa, mientras las bases de derecha votaban al PP.

Esa amplia contestación cívica y el descontento que reflejaba no era un movimiento 'antipolítico', como muchos analistas interesados quisieron juzgar de forma precipitada y sesgada. El problema era que aquel descontento popular y el distanciamiento hacia aquella clase política, junto con una fuerte dinámica participativa en la protesta sociopolítica y una heterogénea representación social, no encontraba una referencia política apropiada (solo parcialmente en IU, que ascendió). Aquella corriente crítica con la última gestión antisocial y autoritaria de la élite gobernante socialista, conllevaba una nueva 'politización', una mayor preocupación y participación cívica por los asuntos públicos. Era un proceso de empoderamiento ciudadano emancipador que, progresivamente, ha cristalizado en un electorado indignado y un apoyo masivo a una nueva alternativa política: Podemos.

Ahora existen amplios sectores conservadores o de derechas, distanciados con la gestión del PP, que combinan la crítica a dos componentes de sus políticas. Por una parte, frente a la agresividad de sus recortes sociales y laborales, junto con el incumplimiento de sus promesas de crecimiento económico y salida inmediata de la crisis y, por otra parte, por su frustración derivada del autoritarismo político y la corrupción imperante en las altas esferas. A pesar de su auto-ubicación ideológica en la derecha, la crítica y la desafección de estas personas hacia el PP tienen un contenido positivo. Ese rasgo los sitúa en el campo de los defensores de la justicia social y la democracia o, simplemente, de la eficacia para mejorar las condiciones socioeconómicas y eliminar la corrupción sistémica. Los enfrenta a una gestión gubernamental antipopular e ineficaz, aspectos que la dirección del PP pretende suavizar o embellecer (o que lo aparezca). Gran parte de ese sector de derecha moderada o centro-derecha ha retirado su confianza en el PP y permanece en la abstención y la indecisión de su voto, hasta que una parte ha cristalizado en el apoyo a Ciudadanos en las recientes elecciones locales. Pero una parte minoritaria, sobre todo joven, se inclina por Podemos, como expresión de su apoyo a una acción clara contra la corrupción o la extrema desigualdad e incertidumbre. Similar cantidad posee el PSOE en esos segmentos (6, 7 y 8), aunque en este caso cabría interpretar que es por su gestión socioeconómica más liberal, una composición de clases medias-altas acomodadas y edad avanzada.

La mayoría de los intentos de agrupamientos de extrema derecha siguen con dificultades para obtener una mínima representatividad social e institucional. Entre las personas auto-ubicadas en esa derecha extrema (9 y 10), algunas de ellas también de capas bajas, precarizadas o en descenso, según este estudio demoscópico, no existe ninguna simpatía hacia Podemos (tampoco hacia el PSOE e IU/ICV). Pueden esperar a un partido neofascista, xenófobo y ultraconservador o ser recuperados por el PP y su corriente *Tea Party*, pero no se confunden respecto del proyecto emancipador y defensor de los derechos humanos de Podemos; aunque es prudente, tal como expresan en su código

ético, vigilar los intentos de intromisión de este tipo de personas autoritarias o simplemente de arribismo.

Tiene interés su análisis para calibrar la composición ideológica del probable electorado de las distintas fuerzas políticas, según la auto-ubicación en el eje izquierda/derecha, y sus posibles ámbitos de expansión. También destaca la amplia movilización en la disposición de voto en los segmentos de izquierda y la importante tendencia de reserva o desafección relativa hacia el PP, entre los segmentos de derecha, y hacia el bipartidismo, entre los de centro.

Es oportuno comparar estos datos con los oficiales del CIS, después de que los haya 'cocinado' con otros datos complementarios, básicamente con el posible incremento de la participación de parte de ese electorado de centro y derecha, hoy abstencionista. Es lo que le permite justificar la ampliación de los porcentajes de estimación de voto a los dos partidos gobernantes, PP-PSOE.

Así, el CIS reinterpreta sus propios datos de estimación directa de voto más simpatía contando con la posible evolución del colchón ideológico de derechas, hoy desmovilizado electoralmente, derivado del desencanto de parte del electorado conservador. Presupone que la estrategia (comunicativa) del PP va a tener cierto resultado a su favor (5,1 puntos adicionales) y que el grueso de los mismos no se va a ir hacia el PSOE (ni al centro ni a algún partido de derecha extrema que pudiese aparecer). Pero, hasta ahora, ni la estrategia del miedo a la victoria de Podemos, ni la estrategia del embellecimiento de la eficacia de su política regresiva para el crecimiento del empleo, tienen credibilidad social.

En el caso del partido socialista, el CIS le añade cuatro puntos a su estimación directa de voto válido. Los podría recoger de los indecisos actuales de los segmentos 5-6 y recuperar algo del 4 a costa del polo alternativo, cosa hoy improbable.

En el caso de Podemos, le rebaja 2,4 puntos, supuestamente con la lógica de que si aumenta la participación de los segmentos de centro y derecha, la proporción de su electorado ubicado, sobre todo, en la izquierda, bajaría.

Por tanto, tomados con la debida precaución, las matizaciones expuestas y considerando que es una foto fija del momento actual, estos datos son orientativos de una realidad y una tendencia que venimos señalando: declive del bipartidismo, incapacidad para gobernar por separado PP y PSOE (aun con aliados de centro o derecha nacionalista) y consolidación de un campo electoral alternativo al *establishment*, de similar o superior representatividad.

Como en el anterior Barómetro de julio de 2014, ya comentado, las fuerzas alternativas (Podemos-IU/ICV...) superan ampliamente al PSOE en los segmentos de izquierda (del 1 al 3) y también en el centro progresista (5), aunque no en la izquierda moderada (4). Ambos, PSOE y Podemos, no tienen ningún apoyo en la derecha extrema (9 y 10) (IU/ICV, tampoco en el centro derecha), y tienen un similar apoyo minoritario (unos nueve puntos) en el segmento de centro-derecha (6) y todavía menos (inferior a cinco puntos) entre la derecha moderada (7 y 8).

Varias constataciones se deducen. El voto a Podemos no es transversal, en el sentido de que sea proporcional en todo el espectro ideológico: se asienta en la izquierda y el centro progresista. Sus dirigentes insisten en que quieren construir una base electoral popular, los de abajo, frente a la oligarquía o los de arriba. Aunque sus sectores más afines

se encuentran entre la mayoría social de la ciudadanía descontenta, la parte indignada y crítica del pueblo. Esa tendencia sociopolítica sí es popular, pero ya se ha ido decantando por una crítica a la desigualdad y la corrupción y una inclinación por la democratización del sistema político y socioeconómico. Esa experiencia la vive y la valora desde su cultura democrática y de justicia social, que identifica con una posición de izquierda o centro progresista, y unos pocos de derecha social y democrática (o sea, haciéndolo compatible todavía con su auto-ubicación en el centro-derecha).

La vía inmediata de Podemos para ampliar su electorado y consolidar una mayoría relativa es incrementar sus apoyos entre esa ciudadanía indignada (en torno a dos tercios de la población) que todavía no se siente representada por ellos. Es de composición popular –clases trabajadoras y medias no ascendentes- y todavía se auto-ubica, sobre todo, en la izquierda (segmentos 3 y 4) y en el centro progresista (5). En el primer caso, en competencia abierta con el PSOE; en el segundo, además de disputar el voto al PSOE, para recoger una parte de la actual abstención de los indecisos (probables desafectos del PSOE - y de UPyD-). Sin descartar una pequeña transversalidad, el apoyo de algún sector minoritario de centro-derecha, popular, progresivo y crítico con el poder establecido.

El PSOE tiene difícil recoger más voto de izquierda (3 y 4), actualmente alternativo, y su granero potencial estaría entre sectores indefinidos del centro (5 y algo del 6 en competencia con el PP y UPyD/Ciudadanos). Su continuismo estratégico y la falta de credibilidad social de su discurso no le permiten remontar significativamente su electorado.

Al PP se espera la ardua tarea de convencer a los segmentos de centro-derecha y derecha para que le voten (en competencia con la abstención y las derechas nacionalistas y regionalistas, de UPyD-Ciudadanos y otros grupos de derecha minoritarios). Pero como decíamos, en ausencia de una auténtica regeneración democrática y una clara mejora socioeconómica y de empleo entre la población, ni el embellecimiento de su gestión económica ni la estrategia del miedo ante el ascenso de Podemos o la crisis territorial, parecen dar resultado para ganar credibilidad en su potencial electorado.

La última encuesta analizada del CIS, de enero de 2015 (publicada el 4-2-2015), en estimación de voto, confirma la primera posición para el PP (27,3%), aunque sigue bajando lenta y progresivamente desde enero de 2012 (42,7%), tras su victoria electoral, y enero de 2014 (32,1%). Solo le consuela que el PSOE (22,2%) también desciende desde esas dos fechas (28,0% y 26,6%, respectivamente). El hecho de la no recuperación socialista en los últimos trimestres, el mantenimiento de distancias significativas con el PP (cinco puntos) y que Podemos (23,9%) le supere, con su continuado ascenso (15,3% en julio y 22,5% en octubre), ha provocado el consiguiente cuestionamiento de la gestión y liderazgo de la dirección del PSOE: su estrategia de ganar por mayoría relativa y condicionar al PP, por un lado, y a Podemos, por otro lado, para que le apoyen se viene abajo y se enfrenta a la realidad contraria de tener que definirse por uno de los dos, con el correspondiente problema en cada caso. Por otra parte, hay que señalar el limitado apoyo electoral a IU (5,2%), aunque sumado al de Podemos (23,9%) y Compromís-Equo (0,6%), las fuerzas alternativas llegarían hasta cerca del 30%. Cabe completar los datos de la auto-ubicación ideológica en el eje izquierda-derecha que en estos meses no sufre grandes variaciones: izquierda radical (segmentos 1 y 2), 9%; izquierda moderada (3 y 4), 30,7%; centro (5 y 6), 29,6%;

derecha moderada (7 y 8), 9,8%, y derecha extrema (9 y 10), 2%; aunque hay que añadir que el 18,8% no sabe o no contesta.

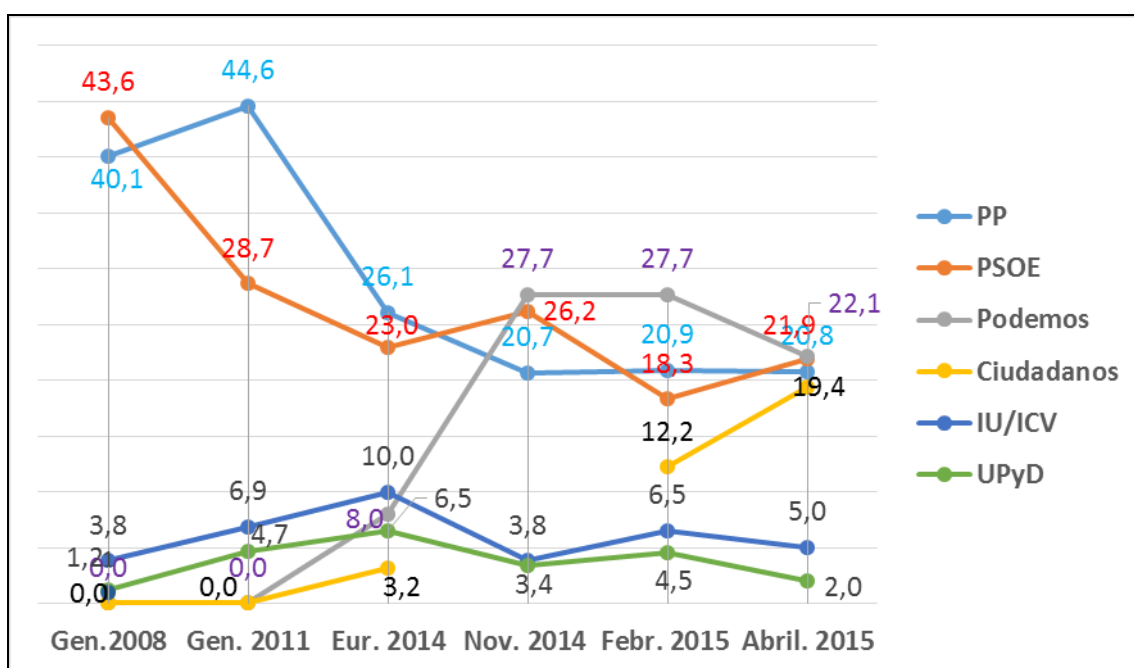
Por último, de forma ilustrativa, exponemos los resultados de la adjudicación de escaños con los datos del sondeo del Barómetro-GESOP, en abril de 2015 (tabla 2), y la evolución de los resultados de las elecciones generales desde 2008, las recientes europeas y las encuestas del CIS, de noviembre de 2014 y febrero y abril de 2015 (gráfico 2).

Tabla 2: Sondeo con adjudicación de escaños

	Escaños	% de escaños	% de voto
PP	102-107	30	23,5
Podemos	78-82	23	20,1
PSOE	75-78	22	19,1
Ciudadanos	55-59	16	17,7
CIU	10-12	3	2,9
ERC	6-8	2	1,9
IU	2-4	1	3,7
UPyD	1-2	1	1,4
Otros	13-15	4	9,7

Fuente: Barómetro GESOP para el diario *El Periódico* (Cataluña), abril 2015

Gráfico 2: Resultados electorales y estimación de voto válido



Fuente: CIS.

En definitiva, se dibuja un cierto empate a tres bandas y las estrategias de cada fuerza política respecto del proceso económico y sociopolítico y las demandas ciudadanas serán fundamentales para que una de ellas pueda sacar ventaja y ser determinante en la hegemonía institucional. En todo caso, queda claro que existe una oportunidad para el cambio político frente al *establishment* y el riesgo de su refuerzo mediante un acuerdo PP-PSOE, y que Podemos, como eje de las fuerzas alternativas y, junto con una ciudadanía activa, puede tener un papel decisivo en la configuración de un nuevo ciclo social y político, democratizador y progresivo.

Lo que está claro es que el PP lo va a tener muy difícil para gobernar y el PSOE también, el bipartidismo descende, se quiebra la simple alternancia y las fuerzas a su izquierda o democrático-populares pueden constituir un polo alternativo de semejante capacidad representativa. Se configuran tres grandes fuerzas políticas (PP, PSOE y Podemos-Izquierda Plural...), junto con otras tres de menor peso en el ámbito del conjunto aunque a tener en cuenta en las distintas posibilidades de gobernabilidad –centro, derecha nacionalista e izquierda nacionalista-. Son relevantes en Cataluña y País Vasco y, en menor medida, en Galicia, Navarra y Canarias, y pueden configurar todavía mayores y complejos (des)equilibrios en el ámbito municipal y autonómico. A ella hay que añadir el reciente auge de Ciudadanos, pero como comodín para PP o PSOE.

En conclusión, no podemos saber con certeza la evolución política de la sociedad hasta las elecciones generales de finales del año 2015. Los resultados de las elecciones municipales y autonómicas, que comentamos más adelante, son un test más certero respecto de las expectativas del proceso siguiente. Pero existen suficientes indicios de las tendencias principales y la conformación de esos tres grandes bloques electorales. Por tanto, sí podemos realizar una hipótesis complementaria sobre las dinámicas existentes, los posibles escenarios y su influencia para las estrategias, discursos y alianzas de los diferentes partidos políticos.

9. Alianzas: ¿Pacto de Estado PP-PSOE o Gobierno alternativo de progreso?

A la luz de los posibles escenarios, veamos las opciones que tienen la actual dirección socialista y las demás fuerzas políticas, de forma lo más objetiva posible y con los datos de hoy. Hay que considerar que los resultados de las distintas encuestas y su interpretación suponen una pugna por asentar una realidad deseable por cada parte para justificar la bondad o el éxito esperable de una estrategia político-electoral. Los utilizaremos como referencia orientativa de las tendencias sociales y electorales, con la mirada puesta en las posibilidades de cambio político en los procesos electorales del año 2015, y sus implicaciones estratégicas.

Hipótesis de escenarios y acuerdos de gobierno

Primera y más querida por el PSOE que apunta la segunda y la tercera encuesta de *Metroscopia*: Mayoría relativa del PSOE frente al PP, fuerza hegemónica en la izquierda, suficiente para dirigir la alternancia. Permitiría la legitimación de la nueva élite socialista, su continuismo estratégico y su mayor autonomía para fijar el rumbo

de las prioridades políticas y socioeconómicas, con subordinación del resto de fuerzas a su izquierda y la posible colaboración del centro y/o la derecha nacionalista.

Segunda, no querida por el bipartidismo: el descenso del PP, la no superación de la debacle por el PSOE y la emergencia de un polo alternativo, de similar o superior dimensión a la socialdemocracia y que, junto con ella, suman más votos que las derechas; este conglomerado estaría bajo la hegemonía de Podemos, aunque todavía fragmentado y con un peso relevante de la Izquierda Plural. Este escenario señala otra hipótesis gubernamental: la posibilidad de un cambio político e institucional sustantivo en las elecciones generales de finales del año 2015, ya que el voto progresista es superior al conservador. Incluso cabe un mayor respaldo electoral a las fuerzas alternativas respecto del PSOE.

No obstante, su conversión en diputados depende de que haya listas unitarias para sortear la penalización de la ley electoral con las fuerzas minoritarias en las cuarenta provincias pequeñas y medianas, por lo que si van por separado (Podemos, IU-ICV...), se podría dar la paradoja de que sumadas tengan más votos que el PSOE, incluso que del PP, y que la fuerza mayoritaria en el Congreso fuera el PP o incluso el PSOE.

Este escenario es más probable que el primero y hoy tiene tres rasgos. 1) Debilitamiento del PP, con gran apoyo económico y mediático, con estancamiento económico y de empleo y sin credibilidad de su política, pero consiguiendo una mayoría relativa, con un suelo que le permitiría mantener el grueso del voto de centro-derecha, pero sin llegar al 30%. 2) Aun admitiendo cierta recuperación del PSOE es difícil que se cumplan sus previsiones optimistas (30%) y lo más probable es que se pueda quedar en torno al 25%. 3) Y la incógnita mayor es la evolución de las preferencias hacia el resto a la izquierda del partido socialista, que podemos aventurar entre el 25% y el 30%, aunque con importantes implicaciones en su traslación a diputados, derivadas de su fragmentación o su unidad.

En el año largo que queda la acción de cada actor político va a intentar modificar al alza esas previsiones y rebajar las del contrincante. A partir de las medias de los datos actuales en que los tres bloques electorales se sitúan en torno al 25% y dependiendo del nivel y tipo de la abstención, podemos contemplar un margen de variación de diez puntos, cinco por arriba y cinco por abajo en cada uno de ellos (entre el 20% y el 30%). Lo que nos da es la práctica imposibilidad de mayoría absoluta por cada uno de ellos, incluido el polo alternativo y, desde luego, de Podemos si va solo. Prácticamente, ese escenario de dificultad para una mayoría absoluta de cada uno de ellos por separado y un relativo equilibrio entre los tres en su respaldo electoral, pendiente de confirmación, es reconocido por las tres fuerzas. Y dirigentes conservadores y socialistas ya han comenzado a proponer un pacto de Estado entre ellos y lo que dirimen es cuál de los dos sería hegemónico.

En particular, la dirección socialista confía en tener una amplia ventaja respecto del polo alternativo, para emplazarlo a un apoyo subordinado y poco condicionado a su programa y liderazgo para hacerse valer como la alternancia al PP. Dirigentes de Podemos señalan que las opciones de formar Gobierno serían entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias, echando la responsabilidad hacia Pedro Sánchez de decidir a quién apoya de los dos.

¿Cómo asegurar un proceso de cambio progresivo?

Pero el problema principal a dilucidar sigue abierto. Si la mayoría de la ciudadanía no apoya una mayoría absoluta de las fuerzas alternativas, ¿cómo asegurar un proceso de cambio suficientemente progresivo? Es decir, si la representación alcanzada por Podemos-Izquierda Plural... no puede aplicar totalmente su programa y su completa hegemonía institucional ¿necesariamente se tiene que conformar con pasar a la oposición parlamentaria? ¿Se podría avanzar en la regeneración y democratización del sistema político y la reorientación de las políticas sociales y económicas, de acuerdo con los deseos expresados por una mayoría social progresista, pero con otros ritmos, alcance y equilibrios en la representación institucional, inicialmente proclamados? O sea, ¿cabría una alianza del PSOE con ese polo alternativo? De momento, no. Las dos partes se oponen. Parece que los consabidos apoyos a ambos partidos gobernantes por el centro de UPyD y/o CIU-PNV-CC, esta vez no son suficientes para garantizar la gobernabilidad, ya sea bajo dirección del PP o del PSOE. ¿Cabe otra opción? Sí, hay otras dos posibilidades aunque tenga el PP mayoría relativa pero haya mayoría electoral progresista. Y volvemos al dilema del PSOE y, en parte también, de las fuerzas alternativas.

Una opción es el apoyo del PSOE a un gobierno del PP. Puede ser en forma de gobierno de gran coalición, estilo alemán, cosa difícil de digerir para el electorado socialista, pero no para su cúpula, o de pacto de legislatura o similar. Lo contrario, del PP al PSOE, también es posible, aunque más improbable con los datos de hoy. No obstante, en el caso de mayoría relativa del PSOE, quizá su dirección pudiese contar con el apoyo del PP y, en todo caso, la presión del *establishment* sería fortísima para que no gire a la izquierda o busque el apoyo alternativo, cosa que en esas circunstancias de continuismo del eje bipartidista sería impensable.

Otra opción es un gobierno alternativo y de progreso, con un peso representativo todavía mayor de las fuerzas alternativas y el apoyo de un nuevo PSOE, más a la izquierda. Este segundo, dada la orientación actual del aparato socialista, también es improbable, aunque debería contemplarse por las fuerzas alternativas como una apuesta por verificar su logro, ya que abriría una dinámica positiva de cambio. Tendría que estar acompañado de un movimiento popular consistente y un ascenso sustancial de esas fuerzas alternativas, sin desventaja política y representativa respecto del PSOE y un fuerte emplazamiento al mismo para su reorientación, cosa hoy dudosa, incluso ante la eventualidad de un proceso de descomposición similar al PASOK griego.

Todos los indicios del proyecto de la actual dirección socialista señalan que podrían inclinarse hacia ese pacto de Estado y el acuerdo con el PP. Tendrían más peso los compromisos de su cúpula con los problemas de 'governabilidad', la 'responsabilidad de Estado' y el consenso estratégico de fondo con la actual gestión liberal-conservadora, dominante en la UE y la socialdemocracia europea. Recibirían distintas ventajas corporativas para esa cogestión del gobierno, aunque de forma subordinada. Y valorarían como mayores riesgos para ellos y sus vínculos con el poder,

el acuerdo con las fuerzas a su izquierda para un gobierno transformador y alternativo, lleno de esperanzas y de incertidumbres.

La consecuencia más importante es que la estrategia dominante y la situación socioeconómica y política serían de continuismo. Su colaboración con la gobernanza se asentaría, incluso a diferencia de la situación más cómoda en Alemania, en la dinámica regresiva de la gestión de la crisis, con un impacto muy dañino para la población y lejos de su salida justa: estancamiento económico y de empleo, consolidación de la pérdida de derechos sociales y laborales, agravamiento de la cuestión social y territorial. Los pocos aspectos económicos positivos, según el pensamiento liberal dominante, avalarían la consolidación de las reformas regresivas (incluidas las laborales y educativas), y dejarían poco margen para cambios progresistas, incluso limitados. Todo ello les podría traer la pérdida de mayor legitimidad ciudadana y mayor dependencia de la derecha y el poder económico. Es un escenario no querido por la dirección socialista y los datos últimos de *Metroscopia* le quitan cierta verosimilitud, echando hacia el PP la responsabilidad de garantizar la gobernabilidad de un ejecutivo presidido por el PSOE, que pudiese tener otro talante menos reaccionario. Pero la tendencia hacia el continuismo estratégico en la eurozona, ligeramente modificado, y el pacto mutuo del bipartidismo es significativa.

La cuestión para la ciudadanía indignada y activa y su representación social y política es cómo prevenir y afrontar esa eventualidad de reagrupamiento y acuerdo del bipartidismo para seguir controlando el poder institucional y continuar con la estrategia de austeridad flexible, o corregida solo parcialmente, y una renovación democrática superficial. La apuesta de Podemos y las fuerzas alternativas es intentar conseguir una mayoría relativa, rompiendo su techo inicial del 25% y superando el 30% (cercano ya en alguna encuesta de *Metroscopia*). Pero todavía sería insuficiente. El objetivo de ganar por mayoría absoluta es legítimo pero improbable. ¿Qué hacer? Habrá que retomar la respuesta a estos interrogantes. De momento, la solución pasa por no dar por hecha la inevitabilidad de ese pacto de Estado y el refuerzo institucional y mutuo del bipartidismo gobernante y ampliar la influencia crítica en el grueso del electorado socialista y de centro progresista.

Por tanto, sería necesaria una labor comunicativa y pedagógica para explicar los riesgos de ese pacto continuista y tratar de impedirlo, convenciendo a esas bases sociales de la necesidad de un giro progresista y democratizador. Y si la cúpula socialista no se aviene a participar en ese cambio histórico, habría que reforzar la exigencia de su renovación, otra vez y a fondo, o profundizar otra fase de desafección hacia ella y su política impopular. En todo caso, la pelota de la responsabilidad política por una probable gran frustración cívica por la ausencia de un cambio sustantivo, cuando hubiera bases sociales para ello, recaería en la dirección del partido socialista.

El fracaso de la idea socialista de obtener mayoría suficiente para ser el eje del nuevo gobierno –posible en algunas instituciones locales y autonómicas–, y una vez constatado el peso relevante del polo representativo a su izquierda, les somete abiertamente a definirse sobre ese dilema: pacto con la derecha, o colaboración en la formación de un gobierno de progreso, con un programa nuevo y compartido con las fuerzas alternativas, que sea representativo de esa mayoría social, de izquierdas y centro progresista. En ese giro estaría más cómoda la mayoría de su base electoral

pero, evidentemente, entrañaría una fuerte brecha de su aparato con los poderosos. Es un reto que deben abordar.

En particular, esta oportunidad histórica de cambio político también supone un dilema estratégico para los sindicatos: bien confían en ese Pacto de Estado entre PP y PSOE, incluyendo una estrategia de acuerdo con las organizaciones empresariales, y se acomodan a él, sin avances significativos para las clases populares y con riesgos para su legitimidad ciudadana; o bien, apuestan por una solución alternativa de cambio, con riesgos de confrontación con el poder establecido, pero siendo partícipes destacados de un proceso progresivo e igualitario, de reafirmación en la defensa de los derechos sociolaborales, e incluso participando como puentes entre las fuerzas alternativas y el propio partido socialista para impulsar y sostener un gobierno de progreso.

10. La perspectiva del cambio institucional

En España, 2015 va a ser el año del cambio político e institucional. La incógnita es su profundidad, las características del nuevo ciclo sociopolítico y sus consecuencias sociales y económicas. Existen datos que vienen anunciando esta tendencia transformadora: fuerte desgaste del PP, falta de suficiente credibilidad del PSOE y amplitud de un electorado indignado con el ascenso del voto estimado a Podemos. Ha entrado en declive el bipartidismo y la simple alternancia de la gestión gubernamental entre los dos partidos representativos del *establishment*, y se consolida una dinámica alternativa.

Distintos estudios demoscópicos evidencian que hoy se daría un triple empate entre las tres fuerzas principales. De momento, señalan un límite de cada una de ellas, situado, en el mejor de los casos, en torno a un tercio del electorado (y sin llegar ninguna a ciento cincuenta diputados). Ello supone la imposibilidad de una mayoría absoluta en el Parlamento de PP y PSOE por separado y tampoco de Podemos, aun contando con la deseable convergencia con el resto de grupos de la izquierda plural y alternativa (IU, ICV, Anova, Batzarre... y Compromís, Equo, Chunta...). Cada uno de ellos tampoco garantizaría suficiente estabilidad parlamentaria con solo apoyos de otras fuerzas minoritarias (centro, derecha nacionalista e izquierda nacionalista); aunque sí es más probable en los ámbitos municipales y autonómicos, con más posibilidades de acuerdos postelectorales con geometría variable.

La estrategia política de cada una de las tres grandes formaciones (y en otro plano, del resto) durante este año tiene el objetivo de romper a su favor ese techo, conquistar una posición representativa hegemónica que le ofrezca una ventaja relativa en la responsabilidad de la composición y gestión institucional, las alianzas y la aplicación de su programa. Antes de exponer los factores que condicionan esos planes veamos el punto de partida actual.

Podemos y las bases sociales para el cambio

El hecho más novedoso del año 2014 es el fenómeno Podemos, con la cristalización de un amplio electorado indignado. Desde los resultados de las elecciones europeas y, sobre todo, a tenor de las encuestas posteriores, se ha hecho

evidente la configuración de un electorado crítico y alternativo que modifica el panorama político. Ya no se puede infravalorar su amplitud y solidez, como se ha hecho hasta hace poco desde ámbitos socialistas y de derechas. No es una burbuja o flor de un día, destinada a desaparecer de forma inmediata, sino una realidad con bases populares arraigadas. Es reflejo, en el campo político-electoral, de la amplia y persistente ciudadanía indignada conformada estos cinco años frente a la desigualdad social, la política de austeridad y el autoritarismo político de las élites económicas e institucionales dominantes.

El vigor participativo y democrático en el rechazo a los recortes sociales y la desafección política hacia sus gestores no conllevaba la despreocupación por la política o los asuntos públicos de este heterogéneo movimiento popular progresista, como de forma interesada apuntaban los analistas afines al *establishment*. Todo lo contrario. La ciudadanía descontenta se fue conformando con la exigencia de responsabilidades hacia los causantes de la crisis económica y sus graves consecuencias sociales y de empleo. La indignación creció contra la gestión regresiva y el incumplimiento de sus compromisos democráticos y sociales del Gobierno Zapatero, con sus planes para hacer recaer los principales costes de la crisis entre las capas populares (reforma laboral, recortes de las pensiones...). Era justo hace cinco años, cuando la dirección socialista empezó a elaborar la estrategia de austeridad, tras la primera crisis de la deuda griega, la reunión de Davos y las sugerencias de los representantes comunitarios y del sistema financiero, y que aplicó con determinación. Luego vinieron los posteriores recortes del Gobierno de Rajoy, todavía más agresivos. Pero junto con la mayoría social crítica y la visión popular de la clase política gobernante como problema, no como solución, se iniciaron las resistencias y movilizaciones sindicales y ciudadanas (sobre todo, con el movimiento 15-M y dinámicas afines), que han mantenido gran legitimidad social.

Demuestra la existencia de una brecha sociopolítica y cultural de una ciudadanía activa, con gran conciencia cívica, democrática y de justicia social, respecto de la gestión regresiva y antisocial de la crisis sistémica, primero del Gobierno socialista y luego del gobierno conservador. Ese impulso sociopolítico de profunda regeneración democrática, de crítica a la corrupción y las ventajas de las élites y de exigencia de un giro social y económico, finalmente, ha cristalizado en el campo electoral e institucional. El desarrollo de ese proceso cívico, con diversos altibajos y una heterogénea representación social, ha culminado en una nueva articulación política.

La dirección de Podemos ha sido hábil para enlazar con esa conciencia social, democratizadora en lo político y progresista en lo social y económico. Ha conseguido su delegación representativa en el ámbito electoral y está aprovechando la oportunidad de facilitar su conversión en capacidad política transformadora y fortalecer las expectativas de cambio.

Esta experiencia popular explica la dinámica de un cambio cualitativo del escenario político. Se abre la oportunidad histórica de iniciar un ciclo progresista en el ámbito institucional que acometa un programa alternativo básico: una gestión equitativa de la crisis socioeconómica y la profunda democratización del sistema político, en el marco de una Unión Europea más solidaria.

Los dos componentes sociopolíticos contruidos han sido muy importantes y decisivos: un fuerte movimiento popular, progresista, democrático y con amplia legitimidad ciudadana, frente a los poderosos que pierden credibilidad social; una articulación política alternativa, cuya representatividad le permite disputar la hegemonía institucional a los dos grandes partidos gobernantes.

No obstante, la principal dificultad empieza ahora con dos retos fundamentales y combinados. Uno, obtener la suficiente mayoría social tras un proyecto de cambio sustantivo. Dos, ser capaz de una gestión institucional que garantice el avance, inmediato y a medio plazo, en los dos planos clave para la mayoría de la población. En primer lugar, de profundización democrática, empezando por la acción firme contra la corrupción y el fraude, la eliminación de privilegios de las capas gestoras y grandes propietarios y el impulso a la participación ciudadana. El segundo lugar, con la derogación de las leyes y medidas más regresivas (laborales, educativas, protección pública...) y el refuerzo de las prestaciones sociales, los servicios públicos y los derechos sociales; y en el medio plazo poniendo las bases para la creación de empleo decente, la modernización del aparato productivo y su sostenibilidad medioambiental, una profunda reforma fiscal progresiva y la regulación económica y financiera al servicio de la sociedad. El breve periodo de nuevas responsabilidades municipales y autonómicas constituye un ejemplo y una prueba a superar.

Además, hay otros dos desafíos complicados. Primero, la colaboración con las fuerzas progresistas, particularmente del sur europeo, con el horizonte de derrotar la austeridad dominante en la Unión Europea, avanzar hacia una salida mancomunada y solidaria de la crisis y evitar el acoso y aislamiento del bloque de poder conservador y los mercados financieros.

Segundo, ofrecer una gestión democrática al conflicto territorial, particularmente de Cataluña y País Vasco, superando el bloqueo existente desde una posición de respeto a los derechos nacionales legítimos, incluyendo el derecho a decidir y mayor autogobierno, desde una óptica integradora y solidaria frente a los intereses corporativos y las prácticas abusivas de las élites respectivas. Ese talante social y respetuoso y la apuesta por el cambio global, institucional y socioeconómico, es lo que ha incrementado el apoyo social a Podemos en esas dos Comunidades (junto con Navarra), y crea un nuevo marco o proceso constituyente para abordar mejor una solución dialogada y satisfactoria para todos, más allá del frentismo nacionalista.

La construcción de una mayoría social suficiente es necesaria para conseguir el aval y la estabilidad del cambio institucional, pero también para consolidar una base popular y un tejido asociativo que, necesariamente, se habrán de activar para defender la dinámica transformadora y profundizar la acción política alternativa desde las instituciones. Existe una triple responsabilidad. En primer lugar, la dirección de Podemos, como grupo político hegemónico y dada la complejidad y diversidad de estas tareas, deberá desarrollar sus cualidades democráticas, integradoras y de respeto al pluralismo, en el ámbito interno, para aprovechar todas sus potencialidades, y respecto del resto de grupos alternativos, políticos y también sociales. En segundo lugar, los dirigentes de Izquierda Unida (junto con otros partidos políticos de izquierda), como agrupación con una experiencia y estructura militante, afianzar su apuesta por la convergencia, la renovación y la reafirmación en los valores igualitarios

y democráticos. En tercer lugar, el conjunto del mundo asociativo y movimientos sociales progresistas, incluidos el movimiento sindical, que debiera apostar por un cambio político favorable a la defensa de los derechos sociales y laborales, y la intelectualidad crítica, tendrían que activarse todavía más por este proyecto y oportunidad de cambio.

El bipartidismo no es la solución

El PSOE tiene un dilema estratégico: o continuismo, aun con la retórica de cambio 'seguro', o giro hacia la izquierda por un cambio progresista real. Su orientación actual no reúne suficiente credibilidad social para asegurar una significativa recuperación electoral y constituirse en el eje principal del nuevo Gobierno. Sus nuevas propuestas, como la anunciada reforma constitucional –incluido el artículo 135–, las condiciona al consenso con el PP; es decir, a quedarse en nada. Sus críticas principales y, especialmente, sus insultos (populistas, leninistas, ilusos, autoritarios...) van dirigidos contra Podemos.

Sus referencias europeas no le vienen bien. Son el italiano M. Renzi, que enseguida ha demostrado su cara antisocial (eliminación de derechos laborales) y antidemocrática (ley electoral discriminatoria y pactada con la derecha), y el francés M. Valls, volcado en unas medidas regresivas para la población. Por no seguir con el PASOK griego, en plena descomposición por su cogestión de la austeridad, o el SPD alemán, colaborador con la derecha de Merkel en la austeridad para el sur europeo para salvar los intereses de los acreedores del norte.

Todo indica que, ante el fracaso de su objetivo de conseguir una ventaja electoral respecto del PP o, al menos, de Podemos, sus compromisos con la 'estabilidad institucional', su 'responsabilidad de Estado' y su posibilismo le inclinen hacia un acuerdo con la derecha. Para su aparato sería una opción menos mala que la de avalar una alternativa de progreso, opción más factible para su base social pero que entrañaría el 'riesgo' de enfrentarse con los poderes fácticos.

En el caso del PP está por ver, para activar a su favor el voto desafecto de centro-derecha, el alcance de su doble plan: embellecimiento de su gestión económica y estrategia del miedo. En el primer aspecto, salvo algunos elementos que favorecen a las grandes empresas y las élites pudientes, aumentando la desigualdad, la realidad es la persistencia y el agravamiento de las condiciones sociales, salariales y de derechos de la mayoría de la población. No hay cambio de tendencia, las capas populares seguimos en el pozo y la incertidumbre y con su prolongación se incrementa el sufrimiento, particularmente de la gente parada y más desfavorecida. Ni el nuevo plan inversor europeo, ni la flexibilidad monetaria del BCE son suficientes para garantizar la creación de suficiente empleo decente. La estrategia del miedo pretende amedrentar y activar a su potencial electorado con el supuesto caos que vendría con el ascenso de Podemos y el cambio político o por el movimiento independentista catalán.

Su plan es una salida lenta y regresiva de la crisis, el fortalecimiento del bloque liberal-conservador, con regímenes más autoritarios, una débil democracia y la subordinación del sur, la disminución de derechos sociales y laborales y el desmantelamiento del Estado de bienestar. Es un proceso que, aun con los ligeros

retoques promovidos por la socialdemocracia europea, condena a la mayoría de la sociedad, particularmente en los países periféricos, a un deterioro de su bienestar social y la calidad democrática de sus sistemas políticos.

Es dudoso que ambos discursos, así como las medidas autoritarias y demagógicas que conllevan, le permitan una recuperación electoral significativa, aunque cabe que obtenga una mayoría relativa. Existe una base social conservadora y de gente acomodada, estimada en un tercio (a repartir con otros partidos de centro-derecha) que constituye su suelo. No obstante, supone una minoría respecto de la mayoría progresista o de centro izquierda y es insuficiente para garantizar la continuidad de su estrategia. De ahí los emplazamientos del PP (y las presiones de los grupos económicos y comunitarios) a la dirección socialista para que acepte un pacto de gobierno con la derecha, en posición subordinada, para reforzar la gestión del bipartidismo declinante con el consenso y apoyo de la Unión Europea.

En definitiva, existen obstáculos poderosos y grandes dificultades para un cambio político sustantivo. Pero el aspecto principal para avanzar hacia él y conformar gobiernos e instituciones de progreso, con suficiente representatividad, es la capacidad de las fuerzas alternativas para acertar en la orientación social, la vinculación con la ciudadanía crítica y la dinámica articuladora democrática.

11. Opciones para Podemos y las fuerzas alternativas

La situación hipotética de minoría parlamentaria de las derechas y el centro y una representatividad electoral de las fuerzas alternativas similar (o superior) a la socialdemocracia es posible, pero también sería nueva para el conjunto de Podemos, Izquierda Plural y el resto alternativo. Su expectativa actual es la posibilidad de ganar las elecciones generales o, al menos, tener una posición de mayoría relativa respecto del PSOE, pero sin llegar a ser completamente hegemónico por sí solo. Se deduce que en caso de no conseguirlo la consecuencia sería permanecer en la oposición parlamentaria y el rechazo en las instituciones y en la calle a la continuidad de similar dinámica gubernamental. Su opción es entre ganar o perder. La cuestión a estudiar, más compleja, es cómo ganar parcialmente cuando se ha perdido parcialmente, haciendo valer el ascenso de su representatividad. Es decir, en caso de no conseguir las fuerzas alternativas ganar las elecciones generales o ser hegemónicas, con suficiente ventaja, cuál es la opción estratégica y de alianzas mejor o menos mala.

Como hemos explicado, existe una base social mayoritaria (al menos del 60%), autodefinida de izquierda y centro progresista, que pudiera compartir un proyecto de cambio sustancial frente a la desigualdad, los recortes y la austeridad, sobre esos dos ejes: democratización del sistema político, con mayor respeto a la ciudadanía, participación cívica y limpieza de la corrupción, y giro socioeconómico, con mayor igualdad, empleo decente y derechos sociales y laborales. La cuestión es que parte de esa base social crítica pueda seguir confiando en el PSOE (incluso algunos en el PP o Ciudadanos), considerando que la política de austeridad y prepotencia ha pasado o es disculpable y que ya estamos en otra fase positiva de recuperación económica o de regeneración democrática. Es el discurso dominante del poder establecido y, ante las evidencias en contrario, veremos que eficacia tiene.

Por otro lado, existe ese tercio de la población que avala o disculpa las políticas regresivas realizadas. Constituye un suelo electoral a repartir, sobre todo, para las derechas y un poco para el partido socialista. O dicho de otro modo, el *establishment* y la estrategia neoliberal tienen todavía una base de legitimidad significativa. Incluso una parte de descontentos con los recortes y la involución social y democrática ha seguido votando al bipartidismo, aunque cada vez menos. Como hemos visto, esos treinta puntos porcentuales de pérdida de voto de los dos grandes partidos gobernantes son de esos sectores de la ciudadanía crítica o que han sido muy perjudicados por los ajustes. Pero a tenor de la amplitud de la ciudadanía indignada con esta deriva antisocial, en torno a los dos tercios de la población, todavía han gente, estimada en un 20%, en la que su indignación cívica tiene una influencia insuficiente para su cambio de voto a los gestores de la austeridad y la prepotencia. Esos sectores priorizan otras variables: valores conservadores en un caso, o el voto útil y menos malo en otro, o bien el condicionamiento de los conflictos nacionales o una trayectoria individual en el ámbito económico-profesional comparativamente más cómoda. Significa que si ambos partidos, PP y PSOE, reinciden en su apuesta regresiva, social y democrática, comparten el apoyo o la responsabilidad de una gestión gubernamental continuista y no consigue calar para la población la raquílica recuperación económica, ni tener credibilidad su retórica embellecida, todavía pueden rebajar su suelo de la mitad del voto emitido. En particular, podría incrementar la descomposición de los apoyos sociales al PSOE, especialmente de su electorado de centro-izquierda que todavía se mantiene sin desafección de voto.

Hay que contemplar también la hipótesis de que Podemos, junto con el resto de fuerzas alternativas, quede muy distanciado de una mayoría suficiente de diputados. Entonces habría que explorar cuáles son las preferencias reales de la mayoría progresista de la ciudadanía en cuanto a la profundidad de los cambios, su ritmo de implementación y con qué equilibrios de su representación institucional.

En primer lugar, se abriría la posibilidad de tratar de evitar la recomposición del pacto del bipartidismo (PP-PSOE) y dirigir un proceso de cambio, respetuoso con los equilibrios reales y la disponibilidad de la mayoría social que apuesta por el cambio. Ese emplazamiento para forzar ese giro hacia la izquierda de la cúpula socialista, quizá solo sea factible tras el reconocimiento de la realidad postelectoral. La predisposición inicial del aparato socialista es nula. Pero los costes de su subordinación a la derecha son muy grandes. Su apuesta por el cambio es una hipótesis improbable, pero merecedora de reflexión y previsión política.

En segundo lugar, esta situación inédita en la historia de España, desde la transición política, abre la posibilidad de un gobierno alternativo de progreso. Tendría una mayoría del voto popular (izquierda y centro progresista) por un cambio sustantivo, socioeconómico y político-institucional. Y podría abordar mejor el conflicto territorial e impulsar la transformación por una Europa más solidaria y una salida más equilibrada de la crisis. Por un lado, es un escenario sin una clara hegemonía socialista que le permitiese imponer el grueso de su gestión y su programa. Por otro lado, habría una representatividad similar (o superior) de las fuerzas a su izquierda, pero sin que Podemos y el resto alternativo consigan una total hegemonía (mayoría absoluta o casi)

y, por tanto, sin poder aplicar su programa inicial y completo o gestionar el poder institucional en exclusiva.

En esas condiciones se produciría la necesidad de un nuevo reequilibrio programático, de composición institucional y gestión gubernamental. Sería dificultoso e inestable. Es prácticamente imposible una alianza estratégica sobre el conjunto de las transformaciones a realizar o una unidad total en el programa o el discurso. Se trata de explorar un acuerdo de mínimos pero quizá suficiente para detener la austeridad, los recortes y el autoritarismo e iniciar una primera etapa transformadora: medidas sociales y económicas favorables para la mayoría popular y comienzo de la democratización política, en particular, la acción firme contra la corrupción. Sería una opción mejor que continuar en manos de la derecha, con el refuerzo del acuerdo bipartidista, la desigualdad social y la subordinación popular. En todo caso, debería ser sometida a amplio debate y deliberación pública y recibir un significativo acuerdo popular.

Este escenario es complejo. Ningún actor principal apuesta por él, pero puede ser el resultante realista de los equilibrios y relaciones de fuerzas en presencia. No es funcional con la prioridad actual de los dirigentes de cada bloque: legitimar electoralmente su discurso, su programa y su liderazgo y aspirar a una mayoría suficiente para gobernar de forma autónoma o exigiendo a los demás la adhesión a la aplicación del grueso de su programa y la subordinación a su liderazgo respectivo. La claridad de cada proyecto y la comprobación del grado de representatividad de cada cual son fundamentales. Los pronósticos en una dinámica muy fluida son aventurados. La estrategia anterior y actual del PSOE no deja margen para alianzas previas o acuerdos programáticos y de gobierno con Podemos y el polo alternativo. Sí que hay suficientes puntos comunes en el interior del conglomerado alternativo para avanzar en acuerdos (pre y postelectorales), no solo para la movilización social, sino para un programa transformador básico y una gestión institucional conjunta. Tienen más afinidad entre ellos, están más necesitados de convergencia, especialmente para las elecciones generales, y deben realizar un mayor esfuerzo unitario y, al mismo tiempo, de respeto al pluralismo y la diversidad existentes. Es un reto para los dirigentes alternativos, pero afecta a la construcción de un proyecto emancipador y es responsabilidad de toda la ciudadanía crítica.

En particular, la incógnita del grado de desgaste de cada uno de los dos componentes del bipartidismo y el grado de avance, consolidación y unidad del polo alternativo o popular, será difícil de despejar hasta los resultados de las propias elecciones generales. Los deseos de cada actor, hoy, pueden definir más el discurso que los indicios de una realidad probable y una dinámica de acuerdo postelectoral posible y refrendado tras una amplia deliberación ciudadana. Ello no es obstáculo para contemplar las realidades previsibles y prevenir la adecuación de los planes iniciales con el objetivo global de avanzar en la democracia y la igualdad social. Esa realidad definitiva se expresará en la noche electoral: reconocimiento de la representatividad de cada cual y su disponibilidad para una salida intermedia o mixta recogiendo puntos de sus respectivos proyectos que sean razonables para ambos. Entonces se tendrán todos los datos y, de acuerdo con sus principios y objetivos fundamentales, se podrán concretar los planes conjuntos. El baño de realidad habrá que complementarlo con la

reafirmación y la adecuación de los ritmos y prioridades del proyecto alternativo de cambio.

Esa posibilidad no es fácil. Tiene varios puntos de apoyo: la legitimidad y la comprensión de una mayoritaria base social progresista y de izquierda; una dinámica transformadora en España inédita en los últimos tres cuartos de siglo, con similitudes y diferencias con la transición democrática; el refuerzo del compromiso social y democrático de la ciudadanía; la mejora de las condiciones socioeconómicas y políticas para el conjunto de la población, en particular, los sectores desfavorecidos, y, en fin, el comienzo de una dinámica de cambio institucional profundo en el marco del sur europeo (junto, quizá, con Grecia).

Las expectativas de un proceso de cambio sustantivo permitirían una mayor activación de las capas populares en defensa de los derechos democráticos y sociolaborales. Por todo ello, el poder establecido reaccionaría con dureza. La confrontación de la derecha, la oligarquía económica-financiera y el núcleo liberal-conservador del poder europeo sería muy fuerte. Si se confirma ese escenario, con ese equilibrio de fuerzas, un gobierno de progreso con esas características sería la alternativa más democrática-radical posible. Es diferente a otras experiencias europeas de gobiernos de coalición de izquierdas o centro-izquierda y, sobre todo, debería fortalecer y asentarse en la participación cívica. El contexto histórico, político y socioeconómico de esta crisis sistémica es distinto. La polarización de intereses y proyectos con el poder establecido es mayor. El desafío contra la derecha y la oligarquía sería muy grande e intenso. La necesidad de consolidar y ensanchar la unidad popular y el refuerzo de una democracia con fuerte contenido social, muy superior. Las capas dominantes tendrán menos legitimidad y representatividad social, pero continuarían con un gran poder e influencia económica, institucional y mediática. Su reacción para que no nazca este proceso de cambio y para derribarlo desde el comienzo de su andadura sería contundente y persistente. Y ya ha empezado.

Las presiones hacia el PSOE para evitar ese escenario serían (y son) fortísimas. El riesgo de su miedo y su rechazo a una solución progresiva y que venza la tendencia de su apoyo al pacto de Estado con el PP, es claro. La falta de suficientes apoyos parlamentarios para garantizar el cambio político-institucional daría al traste con esa hipótesis de gobierno de progreso. La pugna contra el continuismo del *establishment* y la gestión regresiva de la crisis se seguiría realizando en la calle y en las instituciones, con mayor peso de tendencias alternativas. Ha sido posible el cambio en algún ámbito municipal y autonómico, pero es decisivo el cambio político gubernamental y su impacto en la Unión Europea, especialmente en los países del sur. La incapacidad para abrir ese ciclo global de cambio institucional, democratizador e igualitario en España, además de la continuidad de las graves consecuencias económicas y sociales, acarrearía cierta frustración política, mayor sometimiento de las capas populares e involución democrática, con el acoso de los poderosos a los sectores críticos, la movilización social emancipadora y su representación institucional.

Ni que decir tiene que, si las fuerzas alternativas llegasen a ser hegemónicas y obtuviesen una mayoría absoluta (o casi) en el Parlamento con los acuerdos necesarios (incluido parte de una socialdemocracia dividida), la contraofensiva reaccionaria y su bloqueo económico e institucional serían todavía más durísimos. La contrapartida sería

que su mayor peso representativo indicaría una mayor fortaleza y firmeza de una amplia ciudadanía para acometer un profundo cambio socioeconómico y político-institucional. Permitiría afrontar la pugna frente al *establishment*, entonces no solo desde la protesta social sino también desde instituciones significativas, al mismo tiempo que se gestiona el avance de los derechos democráticos y sociales de la población.

Por último, las elecciones municipales y autonómicas han constituido una prueba previa y decisiva sobre esos dos elementos clave: pérdida de hegemonía absoluta del PP y reconfiguración de los equilibrios entre el resto de partidos políticos, hoy con empate entre el PSOE y las fuerzas alternativas a su izquierda. El aprendizaje es imprescindible. La experiencia en la articulación unitaria de este proceso complejo y a muchas bandas, como el impacto de las plataformas unitarias tipo *Ahora en Madrid*, *Barcelona en comú* o las mareas gallegas (con participación de Podemos, ICV, Anova e IU), va a tener gran importancia, en especial en grandes municipios como Barcelona o Madrid. En el ámbito autonómico han existido más dificultades para acuerdos preelectorales entre los grupos alternativos. No obstante, tendrá fuerte influencia el desplazamiento del poder institucional de la derecha de sitios relevantes como la Comunidad Valenciana, Aragón, Castilla la Mancha... y, en otro plano, la Comunidad de Navarra, para lo que sería fundamental llegar a acuerdos mínimos entre las fuerzas alternativas (Podemos, Izquierda Plural, Compromís...). Este bloque o pacto post-electoral alternativo ha conseguido en varios ayuntamiento significativos la mayoría relativa respecto del PSOE, es decir tiene el papel preponderante para definir qué condiciones y qué negociación es posible sobre programas y gestores.

La realidad global es mixta y según qué ayuntamientos y Comunidades Autónomas, sin mayoría absoluta de ninguno, con equilibrios diversos entre las tres partes (PP, PSOE y Podemos-Izquierda plural...) y posibilidades de acuerdos con geometría variable, junto con el papel de comodín de Ciudadanos. En estos ámbitos el apoyo mutuo del bipartidismo es menos imperioso, no hay que darlo por hecho en todas las circunstancias, y el acuerdo para derrotar a las derechas, condicionar al partido socialista y asegurar un recambio institucional con una suficiente dinámica transformadora es menos problemático que en el ámbito estatal.

En fin, cabe otra posibilidad inestable y provisional: la gestión directa de uno de los tres polos, solo con mayoría relativa, sin un acuerdo sólido con otro bloque pero sí con cierta neutralidad de uno de ellos o con la incapacidad para forjar una alianza clara de los dos restantes frente al primero. Es decir, cabrían gobiernos minoritarios de Podemos (y otras fuerzas alternativas) con la permisividad de un PSOE que no pacte con PP; Ejecutivos del PSOE que cuenten con la no beligerancia total de Podemos o, bien, del PP; y Gobiernos del PP con el consentimiento del PSOE y/o apoyo de Ciudadanos. Y todos ellos con distintos apoyos minoritarios no decisivos pero significativos en distintos ámbitos (por ejemplo, centristas o nacionalistas de izquierda o de derecha). Es una situación frágil e inestable, abocada a una transición hacia un acuerdo más sólido o, bien, a nuevas elecciones. O quizá puede ser duradera en algún caso, si adquiere rápidamente mayores legitimidad social y división entre el resto. Esa experiencia permitirá afinar las estrategias y los acuerdos, programáticos, de discurso o de alianzas, pre y postelectorales, para avanzar en el cambio gubernamental con las

elecciones generales de fin de año y abrir un ciclo progresista con una profunda transformación política y económica.

En definitiva, para ampliar las posibilidades más favorables de ese escenario de gobierno de progreso es necesario fortalecer la movilización ciudadana, incrementar el peso electoral de las fuerzas alternativas, persuadir a las bases socialistas, aumentar los riesgos de desafección hacia su aparato en caso de su pacto con la derecha y consolidar una base social de apoyo mayoritario a ese posible y nuevo proceso transformador, no solo desde fuera sino también desde dentro de las instituciones políticas. La conclusión es que *se puede* avanzar en la democracia social frente a la desigualdad.

Bibliografía

- Adell, R. (2013): "Re-mobilización social en contexto de crisis", ponencia presentada en el *XI Congreso Español de Sociología-FES*. Grupo de trabajo nº 20 (Movimientos sociales, acción colectiva y cambio social), Madrid, julio.
- Alonso, L. E. y Fernández, C. J. (eds.) (2012): *La financiarización de las relaciones salariales. Una perspectiva internacional*. Madrid, Catarata.
- Álvarez-Uría, F. y Varela, J. (2004): *Sociología, capitalismo y democracia*. Madrid, Morata.
- Antón, A. (2009): *Reestructuración del Estado de bienestar*. Madrid, Talasa.
- (2011): *Resistencias frente a la crisis. De la huelga general del 29-S al movimiento 15-M*. Valencia, Germanía.
 - (2012): "Política social en tiempos de crisis", en *Cuadernos de Trabajo Social*, 25 (1): 49-62. Universidad Complutense de Madrid.
 - (2013a): *Ciudadanía activa. Opciones sociopolíticas frente a la crisis sistémica*. Madrid, Sequitur.
 - (2013b): "Financiarización: Destrucción de las bases sociales del trabajo", en *Cuadernos de Relaciones Laborales*, Vol. 31, Núm. 2 (2013) 520-527, Universidad Complutense de Madrid.
 - (2014a): *La desigualdad social*, en *Pensamiento Crítico*, enero (23 pp.): <http://www.pensamientocritico.org/antant0114.pdf>
 - (2014b): *Sujetos y clases sociales*. Madrid, *Fundación 1 de Mayo*, Estudio 83, marzo (41 pp.).
 - (2014c): *Indignación, realidades y retos*, en *Fundación Betiko*, mayo (13 pp.): <http://fundacionbetiko.org/wp-content/uploads/2014/05/Indignación-antonio-anton-para-blog.pdf>
 - (2014d): *Desigualdad, recortes y respuestas*. Madrid, *Fundación 1 de Mayo*, Informe 99, julio (53 pp.).
 - (2015): *Una desigualdad intolerable*. Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, Cuaderno de trabajo, enero (115 pp.): http://www.uam.es/personal_pdi/economicas/aanton/publicacion/otrasinvestigaciones/Desigualdad_intolerable.pdf.
- Brito, J. M. (2013): *El ciclo de la protesta social: la acción colectiva después de la indignación*, en *Página Abierta*, nº 224, enero-febrero de 2013.
- Cruells, M. e Ibarra, P. (eds.) (2013): *La democracia del futuro. Del 15-M a la emergencia de una sociedad civil viva*. Barcelona, Icaria.
- Fernández-Llebrez, F. (2014): *El suelo de la izquierda se mueve. Podemos, las elecciones y más allá*, en *Pensamiento Crítico*, julio.
- Flores, G. (2014): "Europa y la búsqueda de soluciones progresistas a la crisis", en *Nueva Tribuna*, 6 de mayo.
- Giddens, A. (1999): *La tercera vía. La renovación de la socialdemocracia*. Madrid, Taurus.
- López Vega, A. (dir.) (2014): *Pulso de España 2014*. Madrid, Ediciones El País.

- Michels, R. (2003) [1912]: *Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las tendencias oligárquicas de las democracias modernas*. Buenos Aires, Amorrortu.
- Navarro, V. (2006): *El subdesarrollo social en España. Causas y consecuencias*. Barcelona, Anagrama.
- Navarro, V., Torres, J. y Garzón, A. (2011): *Hay alternativas. Propuestas para crear empleo y bienestar social en España*. Madrid, Sequitur.
- Piketty, T. (2014): *El capital en el siglo XXI*. Madrid, Fondo de Cultura Económica.
- Polanyi, K. (1992) [1944]: *La gran transformación. La crítica al liberalismo económico*. México, Fondo de Cultura Económica.
- Río (del), E. (2012): *De la indignación de ayer a la de hoy. Transformaciones ideológicas en la izquierda alternativa en el último medio siglo en Europa occidental*. Madrid, Talasa.
- Stiglitz, J. (2012): *El precio de la desigualdad. El 1% de la población tiene lo que el 99% necesita*. Madrid, Taurus.
- Tarrow, S. (2012) [1994]: *El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política*. Madrid, Alianza.
- Touraine, A. (2009) [2007]: *La Mirada social. Un marco de pensamiento distinto para el siglo XXI*. Barcelona, Paidós.
- Wright Mills, Ch. (1957): *La élite del poder*. Madrid, Fondo de Cultura Económica.